



***MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA  
PROFESIÓN DE ABOGADO POR LA UNIVERSIDAD DE  
CANTABRIA  
(EN COLABORACIÓN CON EL ILUSTRE COLEGIO DE  
ABOGADOS DE CANTABRIA)***

**TRABAJO FIN DE MÁSTER**

**CURSO ACADÉMICO 2018-2019**

**CONCURSO DE LEYES Y CONCURSO DE DELITOS EN LOS  
DELITOS DE HURTO Y DE ROBO**

**CONFLICTS OF LAWS AND SIMULTANEITY OF CRIMINAL  
ACTS IN THE CRIMES OF THEFT AND ROBBERY**

**LUCÍA JIMÉNEZ SAIZ**

**DIRECTOR/A: PAZ MERCEDES DE LA CUESTA AGUADO**

## ÍNDICE.

<b>1. Introducción.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Cuestiones relevantes de los concursos de leyes y de los concursos de delitos.....</b>	<b>6</b>
2.1. Clases de concursos.....	8
2.2. Concurso de leyes.....	9
2.3. Concurso de delitos. ....	13
2.3.1. Concurso real de delitos .....	15
2.3.2. Concurso ideal de delitos. ....	17
2.3.3. Concurso medial de delitos. ....	18
<b>3. Análisis práctico de supuestos de concurso de leyes. ....</b>	<b>21</b>
3.1. Delito de robo con fuerza sobre las cosas y delito de daños. ....	21
3.2. Delito de robo con violencia o intimidación sobre las personas y delito de detención ilegal.....	25
3.3. Delito de robo con fuerza sobre las cosas o violencia o intimidación sobre las personas y allanamiento de morada. ....	29
3.4. Delito de robo con intimidación y delito de amenazas. ....	36
3.5. Delito de robo con intimidación y coacciones. ....	40
3.6. Delito de hurto o de robo agravado por ser el autor miembro de una organización o grupo criminal y delito de pertenencia a organización o grupo criminal.....	43
<b>4. Análisis práctico de supuestos de concurso de delitos. ....</b>	<b>49</b>

4.1. Delito de robo con violencia y delito de lesiones o delito de homicidio.....	49
4. 2. Delito de hurto y delito de estafa.....	53
4. 3. Delito de hurto y delito de falsedad documental. ....	56
4. 4. Delito de robo con intimidación sobre las personas y delito de usurpación de funciones públicas. ....	56
4.5. Delito de robo con violencia o intimidación y delito de atentado o resistencia a la autoridad. ....	59
4.6. Delito de robo agravado por el empleo de armas u otros instrumentos peligrosos y delito de tenencia ilícita de armas. ....	62
<b>5. Conclusiones. ....</b>	<b>67</b>
<b>6. Relación de sentencias.....</b>	<b>71</b>
6.1. Tribunal Constitucional.....	71
6.2. Tribunal Supremo.....	71
6.3. Tribunales Superiores de Justicia. ....	73
6.4. Audiencias Provinciales. ....	73
6.5. Audiencia Provincial de Cantabria.....	74
<b>7. Bibliografía. ....</b>	<b>75</b>

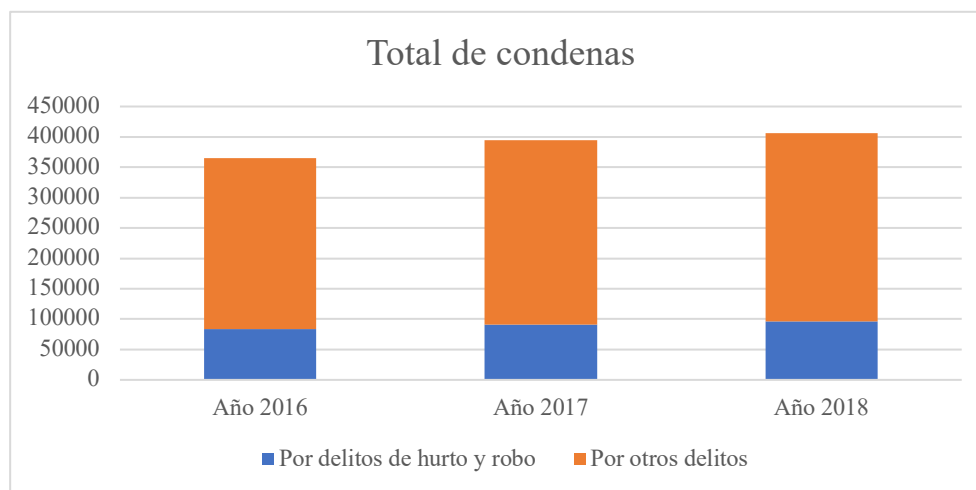
## 1. INTRODUCCIÓN.

En el presente trabajo abordaremos el estudio de los delitos de hurto y de robo, delitos tipificados en nuestro Código Penal dentro del Título XIII cuya rúbrica es *De los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico* y a los que se dedica respectivamente el Capítulo I, *De los hurtos*, que comprende los artículos 234–236 y el Capítulo II, *De los robos*, que comprende los artículos 237-242.

El objeto del estudio no es realizar una reflexión teórica sobre estos delitos, por lo que en este sentido únicamente nos referiremos a los elementos de uno y de otro delito de forma somera, sino que lo que se pretende es realizar un análisis de alguno de los problemas prácticos que plantea su aplicación. En concreto, abordaremos el tratamiento de la dificultad existente en aquellos supuestos en los que los hechos, además de poder ser calificados como un delito de robo o de hurto, pueden ser subsumidos en otro tipo penal, encontrándonos en estos casos ante un concurso de delitos, si es necesario aplicar dos normas para abarcar la totalidad del hecho o ante un concurso de leyes si, para ello, es suficiente con aplicar una única norma.

La frecuencia con la que los operadores jurídicos han de aplicar estos tipos penales en su actividad diaria pone de manifiesto la relevancia de los problemas que estos suscitan en la práctica. Muestra de ello es el número de condenados en nuestro país. Así, en el año 2.018, de un total de 406.327 condenas, 95.858 lo fueron por los delitos de hurto y de robo, 70.102 y 25.756 respectivamente, lo que supone un 23.59% del total de condenas. Estas cifras sitúan a los delitos de hurto y de robo como dos de los más cometidos en nuestro país, en concreto, el hurto es el segundo por el que más condenas se han impuesto, tras los delitos contra la seguridad vial, y el robo el cuarto, tras los delitos de lesiones. Estos valores no reflejan un hecho aislado sino una tendencia que, además está en alza en los últimos años, tal y como muestra un análisis interanual comparativo de los mismos. Así, en el año 2.017, de un total de 394.301 de condenas, 91.452 lo fueron por delitos de hurto y robo, lo que supone un 23.19% del total, y en el año 2.016, de las 365.202

condenas impuestas, 84.040 lo fueron por estos delitos, equivaliendo en términos porcentuales al 21,31%<sup>1</sup>.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las estadísticas anuales de los años 2.016, 2.017 y 2.018 elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con los datos recopilados por el Consejo General del Poder Judicial sobre las condenas impuestas en España.

La misma relevancia práctica de estos delitos puede inferirse de los datos recopilados por el Ministerio Fiscal a propósito de la elaboración de sus Memorias Anuales. En concreto en el año 2.018, de un total de 1.958.056 procedimientos incoados, 205.717 corresponden a delitos de hurto y de robo, 80.698 y 125.019 respectivamente, lo que supone un 10,5% del total; dando lugar finalmente en 303.580 escritos de calificación presentados por los fiscales españoles, en los que los hechos punibles eran calificados como constitutivos de delitos de hurto o de robo en 38.285 ocasiones, 12.360 y 25.925 respectivamente, lo que supone un 12,61% del total. En el año 2.017, en términos porcentuales, los procedimientos incoados por estos delitos supusieron un 10,57% del total y las calificaciones un 13,76%; mientras que en el año 2.016 estos porcentajes

---

<sup>1</sup> Según datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial y recopilados por el Instituto Nacional de Estadística, a propósito de la elaboración de la estadística anual periódica de condenados de los años 2.018, 2017 y 2.016. <https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=4016&capsel=3978> [Consultado: 4/05/2020]

alcanzan los valores de 14,5% y de 14,38% respectivamente, viéndose superados únicamente por los delitos contra la seguridad vial<sup>2</sup>.

Con el objetivo de abordar la problemática concursal planteada por los delitos de hurto y de robo, así como de sus diferentes modalidades, plantearemos las soluciones posibles a cada uno de estos supuestos de concurrencia, exponiendo la posición concreta que adoptan la Doctrina y la Jurisprudencia en cada uno de ellos, destacando especialmente algunas resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Cantabria, provincia de realización de los estudios que dan lugar a este trabajo.

---

<sup>2</sup> Según datos aportados por el Ministerio Fiscal a propósito de la elaboración de sus memorias anuales de los años 2.016, 2.017 y 2.018.  
[https://www.fiscal.es/memorias/memoria2018/FISCALIA\\_SITE/index.html](https://www.fiscal.es/memorias/memoria2018/FISCALIA_SITE/index.html);  
[https://www.fiscal.es/memorias/memoria2017/FISCALIA\\_SITE/index.html](https://www.fiscal.es/memorias/memoria2017/FISCALIA_SITE/index.html);  
[https://www.fiscal.es/memorias/memoria2019/FISCALIA\\_SITE/index.html](https://www.fiscal.es/memorias/memoria2019/FISCALIA_SITE/index.html) [Consultado: 4/5/2020]

## 2. CUESTIONES RELEVANTES DE LOS CONCURSOS DE LEYES Y DE LOS CONCURSOS DE DELITOS.

Si bien lo normal es que una única acción realizada por un sujeto infrinja una única norma penal y se cometa así un único delito, existen excepciones que plantean cuestiones especiales a la Teoría General del Delito que, más allá de una solución *ad hoc* en cada caso que se plantee, requieren un tratamiento general. Por tanto, es necesario resolver aquellos problemas que se plantean cuando en la comisión de los hechos participa más de un sujeto, lo que se hace con las diferentes figuras de autoría y participación. Además de lo anterior y más relevante a nuestros efectos por ser precisamente el objeto de este trabajo, son los supuestos en los que una determinada conducta, llevada a cabo por una o por varias personas, puede ser constitutiva de más de un delito, supuestos que se denominan concurso de delitos<sup>3</sup>.

Muy relacionado con este fenómeno se encuentra el denominado concurso de leyes<sup>4</sup> que parte del mismo planteamiento: existe una determinada conducta que puede ser subsumida en más de un tipo penal. La diferencia estriba en que esta situación de concurrencia de normas solo se da *a priori* ya que el Código Penal prevé una serie de reglas que permite seleccionar cuál de las normas aparentemente aplicables, realmente lo es, de tal manera que estamos ante un único delito<sup>5</sup>.

Precisamente el objetivo de este trabajo es, en los delitos de hurto y de robo, delimitar cuándo estamos ante un concurso de delitos o ante un concurso de leyes. Para ello, es necesario realizar un breve análisis de ambas figuras y establecer los criterios que

---

<sup>3</sup> MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 10ª Ed., Reppertor, Barcelona, 2016, p. 674: “Existe concurso de delitos cuando un hecho constituye dos o más delitos o cuando varios hechos de un mismo sujeto constituyen otros tantos delitos, si ninguno ha sido cometido después de haber recaído condena por alguno de ellos”.

<sup>4</sup> MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, cit., p. 68: “Se habla en cambio, de concurso de leyes cuando uno o varios hechos son incluibles en varios preceptos penales de los que sólo uno puede aplicarse, puesto que su estimación supondría un bis in ídem”.

<sup>5</sup> BARJA DE QUIROGA, J., *Tratado de Derecho Penal Parte General*, 2ª Ed., Aranzadi, Pamplona, 2018. Disponible en: <https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/aranz/monografias/207441691/v2/page/RB-49.1> [Consultado: 25/08/2020]

nos permiten diferenciar una de otra, así como la respuesta del Legislador para solucionar cada uno de estos problemas.

Así, el concurso de leyes designa la situación que se crea cuando de un mismo hecho, constitutivo de una sola infracción se ocupan dos (o más preceptos) y, aparentemente, ambos le son aplicables, aunque sólo uno lo es; y el concurso de delitos se refiere a la situación en la que un mismo sujeto ha vulnerado varios preceptos penales o varias veces el mismo precepto, de tal manera que ha cometido varios delitos y debe responder penalmente por todos ellos<sup>6</sup>.

La conceptualización de ambas figuras pone de manifiesto que, en el caso del concurso de leyes, más que de un problema de concurrencia de normas, se trata de un problema de interpretación, ya que una única es aplicable al supuesto de hecho concreto y no varias y consecuentemente, la interpretación es la que nos lleva a determinar cuál de las normas aparentemente aplicables es la pertinente. Por el contrario, en el caso del concurso de delitos, sí que nos encontramos ante una concurrencia real que se pone de manifiesto a la hora de determinar la pena a imponer al sujeto acusado de varios delitos<sup>7</sup>.

Precisamente, por tratarse de un problema de interpretación de la ley penal, el concurso de leyes se regula en el artículo 8 del Código Penal, en el Título Preliminar que

---

<sup>6</sup> ORTS BERENGUER, E., GONZALEZ CUSSAC, J. L., *Compendio de Derecho Penal*, 10ª Ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 143 ss.

<sup>7</sup> Puede verse CUELLO CONTRERAS, J., “La frontera entre el concurso de leyes y el de delitos”, en *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, 1979, p. 47. Disponible en [https://boe.es/biblioteca\\_juridica/anuarios\\_derecho/abrir\\_pdf.php?id=ANU-P-1979-10004500092\\_ANUARIO\\_DE\\_DERECHO\\_PENAL\\_Y\\_CIENCIAS\\_PENALES\\_La\\_frontera\\_entre\\_el\\_concurso\\_de\\_leyes\\_y\\_el\\_concurso\\_ideal\\_de\\_delitos:\\_la\\_función\\_de\\_la\\_normativa\\_concursal\\_\(I\)](https://boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-1979-10004500092_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_La_frontera_entre_el_concurso_de_leyes_y_el_concurso_ideal_de_delitos:_la_función_de_la_normativa_concursal_(I).). [Consultado 25/08/2020].

Véase también MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal, Parte General*, 10ª Ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, p. 439: “Sucede a veces que una o varias personas cometen, con una o varias acciones, dos o más delitos que son valorados conjuntamente en un mismo proceso. Para estos casos existen en el Código Penal unos preceptos que contienen las reglas a seguir (cfr. arts. 73 a 78”). También en el art.8 se contiene una regla, de relativo valor interpretativo, que se refiere a los casos en los que el delito cometido puede ser subsumido aparentemente, al mismo tiempo, en varios preceptos legales, pero realmente solo uno de ellos le es aplicable. Los arts. 73 y ss. se refieren a lo que tradicionalmente se denomina concurso de delitos, mientras que el art. 8 es sólo el reflejo parcial de lo que se llama concurso de leyes, que realmente es más un problema de interpretación de la ley penal que de concurrencia de varias leyes, pero que por su íntima vinculación con el problema del concurso delictivo se estudia en este capítulo”.



recoge las disposiciones relativas a las garantías penales y a la aplicación de la ley penal, mientras que el concurso de delitos y sus diferentes modalidades, se regulan en los artículos 73 a 77 del Código Penal, dentro del Capítulo relativo a la aplicación de las penas, más en concreto, en su Título II que recoge una serie de reglas especiales para la determinación de estas<sup>8</sup>.

## 2.1. CLASES DE CONCURSOS.

Para tratar de diferenciar estas dos figuras, se hace necesario partir de la siguiente premisa: si el Código Penal dispone que, al autor de un delito, por lesionar o poner en peligro precisamente el bien jurídico que con este delito se busca proteger, se ha de imponer una determinada pena; al autor de varios delitos, con los que consecuentemente daña o pone en peligro varios bienes jurídicos, se le ha de aplicar la pena prevista para cada uno de ellos. Esta afirmación es una manifestación del Principio de Legalidad que implica no solo que únicamente se ha de sancionar una conducta si esta se encuentra legalmente prevista y determinadas sus consecuencias, sino que, *sensu contrario*, precisamente por estar prevista y determinada no puede dejar de sancionarse su comisión<sup>9</sup>.

En aquellas situaciones en las que el sujeto ha cometido más de un delito, lesionando así varios bienes jurídicos e infringiendo varias normas penales sin que la aplicación de una de ellas excluya la aplicación del resto, de tal manera que para sancionar los hechos sea necesario aplicar todas ellas, estamos ante un concurso de delitos y el sujeto responde por todos y cada uno estos delitos, aplicándose así la pena prevista en cada tipo infringido, con independencia de que esta pena pueda ser modulada en aplicación de las normas previstas en el Código Penal que más adelante explicaremos.

---

<sup>8</sup> MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal, Parte General*, cit., p. 439.

<sup>9</sup> QUINTERO OLIVARES, G., *Parte General del Derecho Penal*, 4ª Ed., Aranzadi, Pamplona, 2010, p. 808: “A partir del subprincipio *nullum crime sine poena*, derivado del principio de legalidad, resulta obligado acatar los preceptos penales positivos, y, por eso mismo, quien realiza más de un tipo de delito debe soportar todas las penas en las que incurra”.

Esta situación de concurrencia para la que se prevén las reglas del concurso de delitos se aprecia fácilmente cuando con varias acciones relacionadas se infringen varios tipos penales, pero plantea más dificultades cuando una sola acción se cometen varios delitos y es aquí precisamente donde se encuentra el límite con los concursos de leyes. En estos últimos, un primer análisis del caso parece determinar que son varios los tipos penales aplicables pero un estudio más detallado pone de manifiesto que esta pluralidad de disposiciones que *prima facie* son aplicables, en realidad son incompatibles y únicamente una de ellas lo es, desplazando así la aplicación del resto<sup>10</sup>.

Esto se debe a que la norma a aplicar abarca la totalidad del injusto cometido de modo que, en caso de aplicar además otra, se estaría vulnerando el Principio *non bis in idem* que precisamente prohíbe sancionar doblemente unos mismos hechos<sup>11</sup>. Por ser precisamente su razón de ser la salvaguarda de este principio, las reglas para resolver los supuestos de concursos de leyes están orientadas a determinar qué norma de las aparentemente aplicables al caso es la más adecuada por ser la que abarque de forma más precisa y plena todos los elementos del delito<sup>12</sup>.

## 2.2. CONCURSO DE LEYES.

El concurso de leyes se regula en el art. 8 CP, comenzando este artículo por ofrecer una definición de lo que ha de entenderse por concurso de leyes para, a continuación, exponer los criterios conforme a los cuales han de ser resueltas estas situaciones.

---

<sup>10</sup> QUINTERO OLIVARES, G., *Parte General del Derecho Penal*, cit., p. 817, citando a ANTÓN ONECA “Este tipo de concurso (el ideal o formal) es el que se presenta como situación limítrofe con aquellas situaciones en las que distintas disposiciones legales transgredidas no pueden ser aplicadas a la vez, siendo incompatibles de modo que la aplicación de una excluya la de las otras”.

<sup>11</sup> Puede verse MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, cit., p. 682: “Se habla de concurso de leyes cuando uno o varios hechos son incluíbles en varios preceptos penales de los que solo uno puede aplicarse, puesto que su estimación conjunta supondría un bis in ídem. Ello sucede siempre que uno de los preceptos basta por sí solo para aprehender todo el desvalor del hecho o hechos concurrentes”.

Véase también MORENO-TORRES HERRERA, M.R., “Límites al poder punitivo del estado”, en Moreno Torres (Dir.), *Lecciones de derecho Penal, Parte General*, 4ª Ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, p. 56.

<sup>12</sup> QUINTERO OLIVARES, G., *Parte General del Derecho Penal*, cit., p. 817.

En cuanto al concepto de concurso, el Legislador emplea una fórmula de definición por exclusión, partiendo de la característica común de los concursos de leyes y de delitos, la concurrencia de normas para calificar los hechos y determinando a continuación que los primeros serán aquellos no comprendidos entre los supuestos recogidos en los artículos 73 a 77 CP, en donde se regulan los concursos de delitos. Esta configuración de los concursos de delitos podría ser entendida, al menos *a priori*, como una regulación subsidiaria que únicamente entra en juego cuando no lo hacen los concursos de delitos mas no es así. La práctica penal muestra que, ante estas situaciones, en primer lugar, se trata de buscar una norma que abarque la totalidad del desvalor de la acción realizada por el sujeto, conforme a las reglas del artículo 8 CP y en el caso de que no exista tal norma y, en consecuencia, sea necesario apreciar la existencia de más de un delito para valorar la totalidad de elementos de la conducta, se ha de acudir entonces a las reglas que regulan los concursos de delitos<sup>13</sup>. Esto se explica porque los concursos de leyes encierran realmente un problema de interpretación y aplicación de la ley penal ante hechos que inicialmente podemos pensar que pueden ser subsumidos en más de un tipo penal sin que esto realmente sea así ya que una correcta aplicación de la norma, siguiendo los criterios del art. 8, determina cuál de todas las aparentemente aplicables lo es<sup>14</sup>. Con esta figura lo que se trata de garantizar el respeto de un principio esencial en Derecho Penal como es el *Non bis in ídem*, principio que tiene su anclaje constitucional en el art. 25.1 CE, artículo que recoge el principio de legalidad penal, tal y como ha reconocido el

---

<sup>13</sup> Entre otras, la STS 254/2011, de 29 de marzo: *El concurso aparente de normas implica, por definición, una unidad valorativa frente al hecho cometido, de suerte que la aplicación de uno solo de los tipos que convergen en la definición del concurso, es más que suficiente para agotar todo el desvalor jurídico-penal que puede predicarse de la infracción. Forma, pues, parte de su fundamento la suficiencia de uno de los preceptos para la correcta y plena valoración jurídico-penal de la conducta. De no acoger las normas concebidas por el legislador para la solución de esos casos de colisión de preceptos penales, se correría el riesgo de incurrir en una doble incriminación del hecho, con la consiguiente quiebra del principio de proporcionalidad.*

<sup>14</sup> QUINTERO OLIVARES, G., “Comentario al art. 8 CP”, en Quintero Olivares (Dir.), *Comentarios al Código Penal Español, Tomo I*, 7ª Ed., Aranzadi, Pamplona, 2016, p. 100: “Así pues, en algunos casos la primera lectura de las normas legales parecerá admitir la subsunción de un hecho en distintos tipos de delito. Pero una valoración posterior obligará a aplicar solamente una de esas. En tales casos se entiende que una sola norma acapara el total del comportamiento injusto, ya sea porque lo mayor absorbe lo penal, por ejemplo, o porque lo concreto desplaza lo genérico”.

Tribunal Constitucional a propósito de la delimitación del alcance de este artículo (SSTC 2/1981 de 30 de enero, 77/1983 de 3 de octubre, entre otras)<sup>15</sup>.

En cuanto a la resolución de estos concursos de leyes, nuestro Legislador positiviza en el Código Penal las reglas elaboradas por la Doctrina y que venían siendo utilizadas por la Jurisprudencia para determinar qué norma es aplicable en cada caso, mereciendo esta inclusión, pese a las críticas que inicialmente recibió, una valoración positiva por clarificar la forma de resolver estos problemas de concurrencia<sup>16</sup>. Sin embargo, en lo que no hay consenso es en si el orden establecido en este artículo 8 CP es un orden de prelación conforme al cual han de resolverse estos aparentes concursos de leyes, aplicando las reglas en el orden que aparecen o si se trata de una mera enumeración de criterios a excepción de la última de ellas, el Principio de Alternatividad, respecto del cual, el Legislador expresamente prevé que se aplique de forma subsidiaria al resto cuando no se resuelva el conflicto conforme a ellos.

El artículo 8 se refiere en primer lugar, en el primero de sus apartados, al Principio de Especialidad, *lex specialis derogat lex generalis* y en base a él, en caso de concurrencia de normas, la más específica desplaza la aplicación de la más general. Esto se explica porque el precepto concreto va un paso más allá del general, ya que además de reproducir su contenido, añade algunas especialidades o particularidades y, en consecuencia, de los preceptos aparentemente concurrentes este es el que ha de aplicarse. Será más especial aquel delito que además de reunir los presupuestos que recoge el otro delito en cuestión, recoge algún requisito adicional<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> GARCIA ALBERO, R. M., *Non bis in ídem material y concurso de leyes*, Cedecs, Barcelona, 1995, p. 79.

<sup>16</sup> Entre otros autores, MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal, Parte General*, cit., pp. 448 ss., expone que “El art. 8 puede considerarse hasta cierto punto como demasiado oficioso y en cierto modo innecesario porque no viene más que a recoger los criterios ya asumidos por la doctrina y la praxis jurisprudencial, pero sirven de guía orientadora y como tal debe entenderse, sin darle a sus reglas un valor absoluto, porque, como veremos seguidamente, cada una de ellas presenta problemas interpretativos importantes, tanto aisladamente consideradas, como e su relación entre sí”.

<sup>17</sup> MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, cit., pp. 683 ss.

En segundo lugar, en el artículo 8 CP se recoge el Principio de Subsidiariedad, *lex primaria derogat legis subsidiariae* en virtud del cual, solo se aplicará el precepto subsidiario en defecto del principal. Esta relación de subsidiariedad puede declararse o no expresamente por la propia norma. Así, existirá una subsidiariedad expresa cuando el tipo penal concreto hace depender de la no aplicación de otro tipo más grave la suya propia y existirá subsidiariedad tácita cuando de la interpretación de un tipo se infiere que no ha de ser aplicado cuando pueda serlo otro más grave. La inclusión de esta regla ha sido calificada como innecesaria por algunos autores por entender que los casos que se resuelven aplicándola podrían ser resueltos recurriendo al Principio de Especialidad ya que la norma que resulta aplicable solo puede hacerse una vez descartada la de la principal o recurriendo al principio de consunción cuando existe una norma que recoge una específica dimensión de la conducta y por ello castiga la conducta más gravemente<sup>18</sup>.

En tercer lugar, se regula el Principio de Consunción que plasma el tradicional principio de *lex consumens derogat lex consumpta* y que implica que el precepto más amplio o complejo absorbe los más simples en los que pueden ser subsumidos los hechos aisladamente por ser suficiente el primero de ellos para valorar la totalidad del injusto. Esta regla entra en juego generalmente cuando nos encontramos con la realización de un hecho que acompaña normalmente a de otro y en consecuencia, el Legislador toma ambos en consideración de forma conjunta para determinar la pena que va aparejada al delito al que el hecho en cuestión acompaña; o con hechos posteriores impunes o copenados que son delitos autónomos cuya comisión es instrumental: buscan asegurar, utilizar o aprovechar la posición alcanzada mediante una acción ilícita anterior y cuya sanción se encuentra ya prevista dentro de la del delito principal al que sirven<sup>19</sup>.

Por último, a modo de cláusula de cierre, se plasma en el artículo 8 el Principio de Alternatividad, al que, tal y como hemos aclarado, ha de acudir únicamente en defecto de los anteriormente recogidos y su aplicación supone que la norma a aplicar ha de ser la más grave de todas aquellas que entran en conflicto. La razón de ser de esta previsión no

---

<sup>18</sup> QUINTERO OLIVARES, G., “Comentario al art. 8 CP”, cit., pp. 102 ss.

<sup>19</sup> MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, cit., pp. 685 ss.

es otra que evitar que determinadas conductas queden sino impunes, penadas de forma no adecuada, ya que al aplicar la norma que lleva aparejada una pena más grave se entiende que se tiene en cuenta de forma más fiel la voluntad del Legislador cuando no sea posible determinar esta conforme a los Principios de Especialidad, de Subsidiariedad o de Consunción. Las consecuencias principales derivadas de la inclusión de esta regla son dos: por un lado, se configura el concurso de leyes de forma extensiva, reduciéndose el ámbito de aplicación del concurso ideal de delitos, figura a la que se acudía antes de la entrada en vigor de esta regla para resolver los conflictos normativos parciales, buscando con ella valorar jurídicamente el hecho de forma íntegra; y por otro lado, se acepta por parte del Legislador su propio error ya que existe una conducta que puede ser subsumida de forma indistinta en dos tipos penales distintos, aunque lo normal es que alguna de las circunstancias de la conducta no se recoja en uno de las normas concurrentes<sup>20</sup>.

### 2.3. CONCURSO DE DELITOS.

Ni en nuestro Código Penal ni en los códigos penales de los países de nuestro entorno se define qué ha de entenderse por concurso de delitos, pero esta carencia o laguna ha sido suplida tanto por la Jurisprudencia<sup>21</sup> como por la Doctrina<sup>22</sup> quienes, de forma unánime, han descrito estos como los supuestos en los que uno o varios sujetos realizan una o varias acciones que lesionan o ponen en peligro más de un bien jurídico, y que son subsumibles en más de un tipo penal. Para adoptar esta definición se ha partido

---

<sup>20</sup> QUINTERO OLIVARES, G., “Comentario al art. 8 CP”, cit., p. 111.

<sup>21</sup> STS 520/2017, de 6 de julio: *En el concurso de delitos, el hecho lesiona distintos bienes jurídicos, cada uno de los cuales es tutelado por una norma penal concurrente, de suerte que aquel hecho naturalmente único es valorativamente múltiple, pues su antijuridicidad es plural y diversa, y para sancionar esa multiplicidad de lesiones jurídicas es necesario aplicar cada una de las normas que tutelan cada bien jurídico lesionado.*

<sup>22</sup> QUINTERO OLIVARES, G., “Comentario al art. 8 CP”, cit., p. 100: “El estudio de la concurrencia de normas penales tiene su primera y más importante dimensión en los supuestos de concursos reales de normas penales que eso son los “concursos de delitos”, real, ideal o medial. En todas estas situaciones el autor ha realizado más de un tipo de delito, además ha vulnerado más de un bien jurídico, transgrediendo más de una norma penal, y por lo tanto en estos casos estamos ante un concurso real o efectivo de normas infringidas. Siendo así, es lógico que el derecho positivo reaccione por todos y cada uno de los delitos, con independencia de que la pena a imponer se module de acuerdo con criterios como el de la acumulación jurídica”.

de las disposiciones legales del Código Penal que determinan la pena a imponer a los responsables de esta pluralidad de delitos.

Estas referidas reglas están recogidas en los artículos 73 a 78 del Código Penal y en atención a ellas es posible diferenciar los siguientes tipos de concursos: el concurso real, y dentro de él podemos distinguir dos variantes como son el delito continuado y el delito masa; el concurso ideal y el concurso medial, respecto del cual no existe consenso en la Doctrina en si ha de ser considerado una manifestación del concurso real o del concurso ideal<sup>23</sup>.

Para explicar cada una de estas figuras y solucionar los problemas que originan los concursos de delitos, es necesario comenzar por resolver el problema que los causa, esto es, la determinación de cuándo nos encontramos ante una acción o ante varias acciones, para después determinar si se produce uno o varios resultados y poder clasificar cada supuesto dentro de cada clase de concurso. Esta unidad de acción puede ser considerada desde un punto de vista natural, cuando el movimiento corporal realizado coincide con la descripción típica, equiparándose así el acto con la acción típica; o desde un punto de vista típico o jurídico, cuando estamos ante una pluralidad de actos pero que merecen ser valorados de forma unitaria bien porque expresamente así lo establece el Legislador en la descripción típica de la conducta o bien porque el conjunto de circunstancias que rodean la pluralidad de actos son los que determinan que deban ser

---

<sup>23</sup> MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, cit., p. 677: “Con anterioridad a la reforma operada por la LO 1/2015, el art. 77 equiparaba al tratamiento del concurso ideal el del supuesto de que una infracción sea medio necesario para cometer la otra. ¿Significaba esto que estábamos aquí frente a una manifestación del concurso ideal, o se trataba de todos modos de un concurso real particular? A favor de considerar que el concurso medial que examinamos constituía una modalidad de concurso ideal, en la cual la unidad de fin unificaría los distintos hechos, se alegaba su tratamiento penal como concurso ideal. Mas ya se apuntaba en adiciones anteriores de la presenta obra que la doctrina parece evolucionar hacia la tesis del concurso real, que contaría a favor con el hecho de que, pese a todo, la ley no habla en este caso de un solo hecho, sino que más bien parece contraponer la relación de medio a fin al caso de un solo hecho que constituye varios delitos. Probablemente, sin embargo, el fundamento de la equiparación del tratamiento legal sea análogo al del concurso ideal y responda a la concepción de los clásicos (como Carrara), que consideraban que constituiría una doble sanción de la misma voluntad castigar por separado los delitos unidos en el plan del autor”.

considerados de forma unitaria, por ejemplo, la conexión espacial y temporal o la vinculación interna entre cada uno de ellos, dada por la voluntad del autor<sup>24</sup>.

Cuando es una única acción la que da lugar a la realización de un único tipo penal, esto no plantea ningún problema: si se verifica que esta acción es típica, antijurídica y culpable se procede a la aplicación del tipo. Sin embargo, cuando es una acción la que realiza varios tipos penales, estamos ya dentro del ámbito del concurso ideal de delitos o cuando son varias acciones las que realizan varios delitos, lo que nos sitúa en el ámbito del concurso real.

### 2.3.1. CONCURSO REAL DE DELITOS

Tal y como hemos expuesto, el concurso real de delitos se presenta cuando estamos ante una pluralidad de acciones que infringen varios tipos penales, cometiendo así varios delitos y este, a su vez puede ser homogéneo, si los delitos son de igual naturaleza o heterogéneo, si esta es diferente.

El art. 73 CP es el artículo que lo recoge en los siguientes términos: “Al responsable de dos o más delitos o faltas se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones para su cumplimiento simultaneo, si fuera posible, por la naturaleza y efectos de las mismas”. Se establece un sistema de acumulación material de las penas lo que supone que al autor de los hechos se le impondrá la pena correspondiente a cada uno de los delitos cometidos, penas que se cumplirán de forma simultánea. No

---

<sup>24</sup> Puede verse BARJA DE QUIROGA, J., *Tratado de Derecho Penal Parte General*, cit., disponible en <https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/aranz/monografias/207441691/v2/page/RB-49.7> [Consultado: 25/08/2020].

En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo entre otras, en la STS 35/2012 de 2 de febrero: *La unidad de acción, es cierto, debe afirmarse en todos aquellos en los que exista una unidad de propósito, una conexión espacio-temporal y la infracción del mismo bien jurídico. Dicho con otras palabras, habría unidad de acción si la base de la misma está constituida por un único acto de voluntad. En la STS 213/2008, 5 de mayo -con cita de la STS 25 de junio de 1983 - recordábamos como requisitos para afirmar la unidad de acción: a) desde el punto de vista subjetivo, que concurra un único acto de voluntad encaminado a la realización de toda la dinámica delictiva; b) como elementos o condicionamientos objetivos de esta actividad, que todos los actos estén vinculados espacial y temporalmente, pues la disgregación de la dinámica delictiva en uno y otro sentido pueden romper la identidad que reclama la voluntad única; c) y, desde la óptica normativa, que se dé la identificación en la tipología delictiva.*



obstante, en el caso de no ser posible en atención a la naturaleza y efectos de las penas, subsidiariamente, en el art. 75 CP se opta por el cumplimiento sucesivo de las penas ordenándolas considerando su gravedad<sup>25</sup>. Además, esta acumulación se limita en el art. 76 CP a fin de evitar la imposición de penas excesivamente duras que impidan el cumplimiento de los fines de reinserción que se han de observar en nuestro derecho penal, estableciéndose un límite absoluto que determina que la pena no podrá exceder de 20 años y otro relativo que impide que la pena sea superior al triple del tiempo de la pena más grave de las aplicables, contemplándose alguna excepción<sup>26</sup> para aquellos delitos más graves en los que este límite podrá superarse<sup>27</sup>.

Íntimamente relacionados con el concurso real, tanto es así que una parte de la Doctrina y Jurisprudencia lo clasifican como subtipos de este, nos encontramos con el delito continuado y el delito masa. La figura del delito continuado da respuesta a aquella situación en la que varias acciones de igual naturaleza, realizadas en diferentes momentos, pero a propósito de una identidad de ocasiones, dan lugar a la producción de delitos de igual naturaleza. Es decir, el delito continuado viene a dar respuesta a aquellas situaciones

---

<sup>25</sup> MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, cit., p. 680.

<sup>26</sup> Art. 76 CP: “[...] Excepcionalmente, este límite máximo será: a) de 25 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta 20 años. b) de 30 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años. c) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, dos de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 años. d) de 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años. e) Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y al menos, uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, se estará a lo dispuesto en los artículos 92 y 78 bis”.

<sup>27</sup> Puede verse BARJA DE QUIROGA, J., *Tratado de Derecho Penal Parte General*, cit., disponible en <https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/aranz/monografias/207441691/v2/page/RB-61.1> [Consultado: 25/08/2020].

Véase también MARIN DE ESPINOSA CEBALLOS, E., “Las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y los concursos de delitos”, en Moreno-Torres Herrera (Dir.), *Lecciones de Derecho Penal, Parte General*, 4ª Ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 233 ss.

de concursos reales homogéneos, a las que nos hemos referido con anterioridad, en las que los delitos cometidos merecen ser tomados en consideración de forma conjunta pese a no tratarse de una única acción desde el punto de vista natural, por estar vinculados tanto en el plano objetivo como en el subjetivo, por ser integrantes de un único proceso, lo que nos permite calificarnos como unidad jurídica de acción<sup>28</sup>. Para poder aplicar esta figura es necesario que concurren los requisitos que se establecen a propósito de su regulación en el artículo 74 del Código Penal: como requisitos objetivos, que la pluralidad de acciones, en primer lugar, se realizan en ejecución de un único plan o a propósito de una misma acción y, en segundo lugar, que infrinjan el mismo precepto penal o preceptos penales de igual naturaleza; y como requisito subjetivo, que exista un dolo o voluntad común a este conjunto de acciones. Para estos supuestos, se establece como regla penológica que la pena puede imponerse en su mitad superior, pudiendo llegar a la mitad inferior de la superior en grado y, como regla especial, en los delitos contra el patrimonio, a la hora de imponer la pena se tendrá en cuenta el perjuicio total causado.

La figura del delito masa surge para dar respuesta a un problema práctico con un supuesto de hecho semejante al delito continuado por tratarse precisamente de una pluralidad de acciones ejecutadas en el marco de un único plan y que infringen bien el mismo tipo penal o bien tipos de la misma naturaleza, pero en el que el sujeto pasivo del delito no es el mismo. Estos delitos, en aplicación del art. 72 CP, pueden ser penados con la pena superior en uno o dos grados en atención a su gravedad.

### 2.3.2. CONCURSO IDEAL DE DELITOS.

La figura del concurso ideal sirve para dar cobertura a aquellas situaciones en las que, habiendo una única acción, con esta se realizan varios tipos penales o un mismo tipo en repetidas ocasiones y puede ser homogéneo, si los delitos cometidos son iguales o de igual naturaleza; o heterogéneos, si esta es diferente. En estas situaciones es necesario

---

<sup>28</sup> GARCÍA ALBERO, R. M., “Comentario al art. 74 CP”, en Quintero Olivares (Dir.), *Comentarios al Código Penal Español, Tomo I*, 7ª Ed., Aranzadi, Pamplona, 2016, pp. 568 ss.

imputar a un sujeto la realización de varios tipos delictivos en tanto que para abarcar la totalidad de la antijuridicidad de la conducta es necesario aplicar todos ellos<sup>29</sup>.

Es precisamente esta modalidad de concurso de delitos la que más próxima se encuentra con el concurso de leyes: en ambos casos unos hechos pueden ser subsumidos en varios preceptos penales, sin embargo, en el caso del concurso de leyes esto es una apariencia porque existe una norma que es suficiente para englobar la totalidad del injusto de la conducta del sujeto activo, mientras que en el caso del concurso de delitos ideal es necesario que para ello se apliquen todos los preceptos legales infringidos.

Su regulación la encontramos en el art. 77 CP en donde el Legislador, en primer lugar, excluye de la aplicación de las reglas del concurso real y del delito continuado aquellos supuestos de concurso ideal, que describe como las situaciones en las que una acción de lugar a la producción de dos o más delitos. Si el concurso ideal parte de la realización de un solo hecho es necesario determinar cuándo esto ocurre: existe unidad de hecho cuando la actuación corresponda a una misma manifestación de voluntad y sea valorada unitariamente en un tipo penal. Esta unidad de hecho ha de dar lugar a la comisión de más de un delito y ha de perseguir una pluralidad de fines.

En segundo lugar, establece como regla penológica a aplicar a estas situaciones el Principio de Exasperación, que supone que estos hechos han de ser sancionados con la pena prevista para la infracción más grave en su mitad superior, pero limita esta agravación a que el resultado de esta no sea superior a la suma de las penas que podría imponerse de penar de forma independiente los delitos y determina que, de ser así se penará cada uno de ellos por separado.

### 2.3.3. CONCURSO MEDIAL DE DELITOS.

El concurso medial de delitos se regula también en el art. 77 CP y sirve para dar respuesta a las situaciones en las que la comisión de una infracción sea el medio necesario para cometer otra. Existen en la Doctrina dos posiciones en relación con la naturaleza de

---

<sup>29</sup> GARCÍA ALBERO, R. M., “Comentario al art. 77 CP”, en Quintero Olivares (Dir.), *Comentarios al Código Penal Español, Tomo I*, 7ª Ed., Aranzadi, Pamplona, 2016, pp. 583 ss.

esta figura: algunos autores consideran que se trata de una manifestación del concurso ideal en tanto que uno y otro reciben la misma respuesta penal, mientras que otros consideran que se trata de una modalidad de concurso real ya que no estamos ante un solo hecho, sino que existe una relación medio-fin entre la comisión de varios delitos mediante la realización de un solo hecho.

La mayor conflictividad de esta figura la encontramos en la determinación de cuando un delito es el medio para cometer otro. Inicialmente se consideró que esta relación se daba cuando un delito no puede cometerse nunca por su propia naturaleza, sino que se requiere la realización del otro, entendido como medio pero la interpretación actual hace referencia al caso concreto, de tal manera que la necesidad de la comisión de un delito para la del otro concorra en el caso en cuestión<sup>30</sup>. Para poder apreciar en cada caso la necesidad, el Tribunal Supremo<sup>31</sup> exige que las acciones han de estar vinculadas por el nexo medio-fin, considerando no solo el propósito delictivo del autor sino también otros elementos como el temporal, espacial o lógico.

El artículo 77 a propósito de esta figura dispone que “Cuando un hecho constituya dos o más delitos, o cuando uno sea medio necesario para cometer el otro, se impondrá una pena superior a la que habría correspondido en el caso concreto, por la infracción más grave, y que no podrá exceder de la suma de las penas que hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos. Dentro de estos límites, el juez o tribunal individualizará la pena conforme a los criterios expresados en el artículo 66. En todo caso

---

<sup>30</sup> MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, cit., p. 677.

<sup>31</sup> STS 3259/1993, de 22 de mayo: *La dificultad está en determinar en cada caso si concurre o no la mencionada necesidad. Algún sector doctrinal acude a los distintos elementos de los correspondientes tipos delictivos para aplicar el concurso cuando hay una identidad parcial entre tales elementos o cuando un delito se integra como uno de los elementos del otro sin que se produzca absorción [...] En principio para que, en estos casos de identidad parcial o conexión típica, ha de entenderse que concurre la mencionada necesidad. En realidad, serán las circunstancias concretas de cada caso las que hayan de valorarse para determinar si cabe aplicar o no el concurso medial, teniendo en cuenta los elementos lógicos, temporales o espaciales que pudieran servir de vínculo entre los diversos hechos delictivos. Desde luego, nuestra jurisprudencia lo aplica también a casos en que hay una desconexión típica total, es decir, aunque en las correspondientes descripciones de los delitos en relación de medio a fin no haya ningún elemento común [...]. En conclusión, para la existencia de concurso medial no basta el propósito de una relación de medio a fin existente en el ánimo del sujeto, sino que entre los diversos hechos constitutivos de diferentes delitos ha de haber una conexión de necesidad de carácter objetivo a deducir en cada supuesto de los distintos elementos concurrentes en el caso, de modo tal que pueda decirse que cada uno de ellos fue imprescindible para la comisión del otro.*

la pena no podrá exceder del límite de duración previsto en el artículo anterior”. De nuevo aquí nos encontramos con que el Legislador primero describe qué es un concurso medial, un hecho u acción que da lugar a varios delitos siendo uno el medio de comisión de los otros y la regla penológica que se ha de observar, el Principio de Exasperación, que consiste en aplicar la pena superior en grado a la prevista para el delito más grave y limita su extensión, a la suma de la pena que se habría de imponer a cada delito por separado y de superarse este límite se habría de sancionar la conducta sancionando independientemente cada delito.

### 3. ANÁLISIS PRÁCTICO DE SUPUESTOS DE CONCURSO DE LEYES.

Bajo este epígrafe se realizará un análisis de diversos supuestos específicos de concurrencia normativa que se plantean entre los delitos de hurto y de robo con otros delitos que se han resuelto conforme a las reglas del concurso de leyes, argumentando el por qué de esta solución y haciendo especial énfasis en la posición adoptada por nuestra Jurisprudencia.

#### 3.1. DELITO DE ROBO CON FUERZA SOBRE LAS COSAS Y DELITO DE DAÑOS.

A propósito de la comisión del delito de robo con fuerza sobre las cosas, es frecuente que se ocasionen daños en la cosa sobre la que está fuerza recae y de la que se sirve el autor para superar el obstáculo que este objeto supone, ya que es lo que le separa de la cosa mueble ajena de la que presente apoderarse. Esto supone que la conducta, al menos *a priori*, pueda ser constitutiva de un delito de daños además de un robo con fuerza sobre las cosas.

El Código Penal tipifica en el art. 263 y siguientes el delito de daños previendo en su modalidad básica que “El que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos de este Código, será castigado con multa de seis a veinticuatro meses, atendidas la condición económica de la víctima y la cuantía del daño”. El Legislador tipifica así la conducta de un sujeto que destruye o deteriora alguna cosa perteneciente al patrimonio de otro sujeto<sup>32</sup> pero requiere para su aplicación que estos hechos no estén ya contemplados en otro precepto más específico del propio Título que los regula, el Título XIII, que sanciona las conductas que atentan contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Pese a la existencia de esta previsión, la misma solución podría alcanzarse si se prescindiera de ella porque como ya hemos expuesto en el lugar pertinente

---

<sup>32</sup> MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal, Parte Especial*, 22ª Ed, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 463 ss.: “Aunque se puede entender el daño en un sentido normativo como todo empobrecimiento en el patrimonio ajeno, es preferible un concepto más descriptivo, ya que el concepto normativo produce una confusión entre el daño como causa y el perjuicio patrimonial como efecto. El daño al que se refiere el Código Penal tanto en este Capítulo IX del Título XIII, como en otros lugares, supone la destrucción o menoscabo de una cosa independientemente del perjuicio patrimonial que el daño pueda ocasionar”.

de este trabajo, en los supuestos de concurrencia aparente de normas, cuando exista una ley que contemple de forma más específica o especial una situación esta ha de desplazar de su aplicación a la ley más general.

Puesto que los daños cuentan con tipificación expresa y en un delito de robo con fuerza se pueden ocasionar daños, habrá que determinar si los mismos se encuentran abarcados en el desvalor de acción del delito de robo y si esto fuera así, el art. 243 CP comprendería el total desvalor de la conducta. Ahora bien, si por el contrario el delito de robo no comprendiere los daños sería necesario aplicar, además del delito de robo con fuerza, el delito de daños.

Para apreciar además del delito de robo con fuerza el delito de daños, la Jurisprudencia<sup>33</sup> viene exigiendo la concurrencia de dos requisitos y que son, por un lado, la verificación del menoscabo patrimonial sufrido por el sujeto pasivo y por otro, que el ánimo del autor de los hechos sea el de producir una lesión en la propiedad de una persona. Lo fundamental es, precisamente, este último requisito y que, por tanto, esta voluntad de dañar o *animus damnandi* sea el objetivo principal del autor porque de estar presente de forma accesoria o pretendiéndose de forma supeditada a otra finalidad principal no cabría apreciar un delito de daños. Es decir, cuando además de la voluntad de apoderarse de una cosa ajena con ánimo de lucro mediante el uso de la fuerza, el autor tiene la voluntad de dañar la cosa no estarían los daños subsumidos en el delito de robo con fuerza y nos

---

<sup>33</sup> Entre otras, STS 341/2015, de 16 de junio: *En efecto hemos de partir de que en relación al delito de daños la doctrina viene estimando que el objeto material del mismo es la cosa mueble o inmueble, material y económicamente valorable susceptible de deterioro o destrucción y de ejercicio de la propiedad. Su conducta típica consiste en la destrucción, deterioro o inutilización con menoscabo sustancial de la cosa. Son posibles todos los medios de comisión aunque algunos de ellos sean objeto de especial agravación en el art. 264 CP. La configuración del tipo orientado a la prohibición del resultado hace perfectamente posible la comisión por omisión, y el resultado se produce con la destrucción, deterioro o menoscabo de la cosa, siendo factible cualquier forma de tentativa. Respecto al dolo el delito de daños requiere: en primer lugar, que conste la realidad y cuantía del menoscabo patrimonial sufrido por el sujeto pasivo del delito, y en segundo, que el ánimo o intención del agente y sus actos de ejecución demuestren de modo cumplido su designio de querer directa y exclusivamente causar un daño sin otro propósito que pudiera exculpar su acción. Es indispensable el propósito en el agente conocido por animus edamandi, o lo que es lo mismo, que el autor sabe: elemento cognoscitivo del dolo, que su acción va a producir daños en el patrimonio ajeno y los realiza: elemento volitivo del dolo ( STS. 785/2000 de 30.4 ), bien entendido que, como recuerda la STS. 97/2004 de 27.1 , el delito de daños no exige un dolo específico, basta un dolo de segundo grado e incluso un dolo eventual -y su causación por imprudencia, en el supuesto del art. 267-. Existe el delito de daños aunque el culpable no buscase directamente la causación de los daños, bastando los asumiese como resultado o consecuencia muy probable de su acción ( STS. 673/2014 de 15.10 ).*

encontraríamos ante un concurso de delitos mientras que, si los daños no son pretendidos por el autor o al menos no son su motivación principal, estaríamos ante un concurso de leyes y por aplicación de las reglas previstas en el artículo 8 CP, al ser el delito de robo con fuerza un tipo complejo que integra los daños<sup>34</sup> estos se verían absorbidos por el delito de robo y solo se habría de sancionar la conducta como constitutiva de este último delito.

Esta tesis sucintamente expuesta es la que se sigue por la Jurisprudencia. Entre otras, el AAP de Salamanca 108/2012, de 30 de marzo de 2012, expresamente reconoce que *[l]a jurisprudencia más reciente ha venido estableciendo que la infracción punible de daños requiere la concurrencia de dos requisitos fundamentales, cuales son, de un lado, que conste la realidad y cuantía del menoscabo patrimonial sufrido por el sujeto pasivo del delito, y, de otro, que el ánimo o intención del agente y sus actos de ejecución demuestren de modo cumplido su designio de querer causar un daño sin otro propósito que pudiera exculpar su acción de dañar, inutilizar, destruir o deteriorar una cosa ajena con ánimo de dañar. Y así en la SAP. Girona (Sección 3ª) de 7 de febrero de 2.000 se afirma que “efectivamente, tal infracción requiere, además de la objetividad de la lesión a la propiedad de una persona, del elemento subjetivo consistente en la intención del autor del hecho, que no es otra que el llamado “animus damnandi” o exclusiva intención de dañar; así cuando dicha intención concurre en la actuación del sujeto activo, pero no de forma preponderante, sino como mera consecuencia de una intención prioritaria, ésta subsume aquélla y deja vacío de contenido dañoso la acción del autor, cuyo importe económico sin duda podrá repercutirse pero en virtud de esa novedosa o principal actitud, en vía civil si la misma no constituye infracción sancionable por la jurisdicción civil, o en esta vía si aquel ánimo pudiera dar lugar a delito o falta”. Lo que igualmente se halla ausente en el presente caso, pues ni la intención de la denunciada fue*

---

<sup>34</sup> MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, cit., p. 685. Explica que se aplicará el Principio de Consumción como regla de resolución de los concursos de leyes cuando “la realización de un supuesto de hecho típico conlleva la de otro. De ahí que supone que el legislador ha de haberlo previsto al fijar la pena del delito que normalmente supone el hecho acompañante. El ejemplo paradigmático que suele proponerse es el de robo con fractura, que normalmente entraña ciertos daños normales, aunque sean algo superiores a los estrictamente necesarios. [...] Cuando los daños causados por sí solos tengan tanta gravedad como el propio robo, podrá denegarse la consumción por entender que tan graves daños no son ya los previstos como normales al señalarse la pena del robo”.



*directamente la de ocasionar un daño ni tampoco éste se ocasionó en puridad sobre cosa ajena, por lo que tampoco puede apreciarse la existencia de indicios suficientes de tal infracción penal, ni siquiera en su condición de falta.*

Esta línea jurisprudencial es seguida por la Audiencia Provincial de Cantabria entre otras, en la SAP 274/2019, de 20 de mayo, en la que confirma la condena únicamente por un delito de robo con fuerza, sin apreciar un delito de daños, impuesta a un sujeto que para acceder al local en el que se encuentran los objetos pretendidos, rompe su persiana y fractura la luna.

Finalmente, cuando nos encontramos ante un concurso de leyes en el que el delito de robo con fuerza subsume al delito de daños, los perjuicios económicos originados por estos darán lugar a responsabilidad civil.

Solución diferente es la que se ha de ofrecer cuando la fuerza empleada causante de los daños no es un medio necesario para apoderarse de la cosa, bien por no ejercerse para acceder al lugar en el que esta se encuentra o para abandonarlo; bien por ejercerse directamente sobre la cosa objeto del delito y no sobre su aquel objeto que la contiene; bien por ejercerse una vez consumado ya el delito, habiendo logrado ya el apoderamiento el autor de la conducta; o bien por ser desproporcionada respecto del obstáculo que supone el objeto sobre el que recae dicha fuerza. En todos estos casos se admite el concurso de delitos, concurso que habitualmente será medial cuando necesariamente el autor de la conducta ha de producir los daños en el objeto que contiene la cosa para poder apoderarse de esta pero que puede ser incluso real cuando la producción de los daños no sea indispensable para cometer el robo<sup>35</sup>. Estos daños, cuando no concurra el *animus damnandi*, se imputarán a su autor a título de dolo indirecto<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> GALLEGOS SOLER, J. I., “Delitos contra bienes jurídicos patrimoniales de apoderamiento”, en Corcoy Bidasolo (Dir.), *Manual de Derecho Penal Parte Especial Tomo I*, 2ª Ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 519 ss.

<sup>36</sup> QUINTERO OLIVARES, G., “Comentarios al art. 238 CP” en Quintero Olivares, *Comentarios al Código Penal Español, Tomo II*, 7ª Ed., Aranzadi, Tarragona, 2016, pp. 55 ss.

Esta posición que distingue con tal precisión entre los supuestos de concurso de leyes y de delitos ha sido ratificada por el Tribunal Supremo en numerosas sentencias, entre otras en la STS 137/2019 de 12 de marzo, en la que dispone lo siguiente: *[o]rdinariamente, los daños causados en un robo con fuerza en las cosas, cuando su origen se sitúe precisamente en el empleo de la fuerza típica, quedarán consumidos en el delito de robo, como acto copenado, al tratarse de resultados unidos indisolublemente al empleo del elemento típico de la fuerza y, por lo tanto, ya previstos con carácter general en la sanción del delito. La cuestión se plantea en otros términos cuando los daños causados presentan tal relevancia que, de ser estimados como delito, serían castigados con pena más grave que la que correspondería al delito de robo. En estos casos, es posible la punición separada, sin perjuicio de la posibilidad de apreciación de un concurso medial. A estos casos pueden equipararse aquellos otros en los que el tipo penal aplicable a los daños tiene en cuenta otros bienes jurídicos distintos del patrimonio, puede entonces no puede entenderse que el desvalor asociado a esa conducta haya sido previsto por el legislador al establecer la pena para el delito de robo.*

### 3.2. DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN SOBRE LAS PERSONAS Y DELITO DE DETENCIÓN ILEGAL.

Cuando concurren unos hechos que pueden ser constitutivos de un delito de robo con violencia o intimidación y de un delito de detención ilegal es frecuente plantearse si la detención ilegal es precisamente una manifestación o forma de intimidación o violencia y en consecuencia, queda subsumida por el delito de robo o si, por el contrario, esta detención supera o no queda comprendida dentro de la sanción que ofrece a esta conducta el art. 242 CP por lo que sería necesario penar cada una de estas conductas por separado bien a través de un concurso medial, si la detención ha sido instrumental al robo o bien a través de un concurso real, si se trata de acciones autónomas que dan lugar a delitos independientes.

Estas situaciones han venido siendo resueltas en la práctica analizando las particularidades concretas que concurren en cada caso, pero es cierto que, a la vista de las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo, podemos afirmar que este órgano logra diferenciar tres realidades distintas y ofrece a cada una de ellas una solución diferente teniendo en cuenta variables como la duración de la detención ilegal, la presencia de un

especial elemento subjetivo en la comisión de los hechos y la necesidad de que medie la privación de libertad del sujeto para poder apoderarse de la cosa objeto del delito.

Una de las sentencias que mejor sintetiza y resuelve este problema es la STS 60/2018 de 2 de febrero, que recoge la doctrina jurisprudencial fijada en la STS 788/2017 de 7 de diciembre o la 282/2008 de 22 de mayo y lo hace de la siguiente manera: *[e]s conocida la jurisprudencia que resuelve los supuestos en que coexiste robo y detención ilegal. Aquella ha diferenciado tres posibles supuestos básicos cuando se trata de la concurrencia de actos que pueden ser constitutivos de delitos de robo con intimidación y de detención ilegal. En primer lugar, cuando la detención es medio esencial e imprescindible para el apoderamiento y se produce, exclusivamente durante el tiempo necesario para la ejecución del delito, incluyendo la huida del lugar. En segundo lugar, cuando la detención se prolonga más allá de la ejecución del robo. Y, en tercer lugar, cuando la detención ilegal no aparece instrumentalizada para la comisión del robo. En el primer caso, el delito de robo absorbe la privación de la libertad, que resulta inescindible del mismo, pues se entiende que la intimidación o la violencia propias del robo implican necesariamente la privación de la libertad de movimientos de la víctima durante la ejecución, debiendo resolverse como un concurso aparente de normas con aplicación del artículo 8.3 del Código Penal. En el segundo, se trata de un concurso real de carácter medial, al aparecer la privación de libertad como medio necesario para la comisión del robo, aunque por sus características presenta autonomía propia, más allá de la privación de libertad inherente al mismo acto de apoderamiento. Y en el tercer caso, al aparecer de forma relacionada pero independiente del acto de robo, la detención mantiene su propia sustantividad dando lugar a un concurso real de delitos.*

Por lo tanto, en primer lugar, cuando la detención se prolonga únicamente durante el tiempo esencial o necesario para cometer el delito y no preside la acción del autor un ánimo especial más allá del de asegurar la comisión del delito de robo y se utiliza precisamente como garantía de esta comisión, incluyéndose en este sentido la protección de la huida del sujeto autor de los hechos, la Jurisprudencia entiende que nos encontramos ante un concurso de normas. En este caso, aunque aparentemente resulten aplicables tanto el tipo de robo con violencia o intimidación como el de detención ilegal, castigando la conducta como constitutiva de un delito de robo se está ya sancionado la totalidad del

desvalor de la acción del sujeto. Esta solución viene determinada por la aplicación del artículo 8.3 CP que plasma el Principio de Absorción como regla de solución a estas situaciones de concurrencia de normas y cuya aplicación determina que el precepto más amplio o completo, el robo con intimidación en este caso, absorbe a los castigados dentro de este, la detención ilegal, por entenderse como una forma de la intimidación prevista en el tipo. La sanción por la detención queda integrada dentro de la del robo ya que esta última integra el total del desvalor de la acción.

En segundo lugar, si la detención se ha prolongado tras la comisión del delito, manteniéndose al sujeto pasivo del mismo privado de su libertad una vez perpetrado el robo, pero sin que haya más ánimo que el de cometer este, nos encontramos ante una detención ilegal que se presenta de forma autónoma al robo ya que, si bien se encuentra relacionada con este por ser instrumental a su comisión, una vez que se ha producido el apoderamiento efectivo del sujeto autor de los hechos del bien objeto del delito, la detención se ha mantenido y ya no es posible encontrarnos con una única norma que de cobertura o sancione de forma unitaria la conducta del sujeto y se ha de castigar al sujeto por los dos delitos cometidos. Esta situación entonces se ha de resolver conforme a las reglas del concurso de delitos, en concreto, aplicando lo previsto para las situaciones de concurso medial, cuando se comete un delito como medio para realizar otro y así el artículo 77 CP determina en que se ha de sancionar esta conducta aplicando la pena prevista para la infracción más grave aumentándola en un grado, ello con la condición de que no se supere con esta regla la suma de las penas concretas que hubiese correspondido de penar el robo con intimidación y la detención ilegal por separado.

En tercer y último lugar, cuando existe una privación de la libertad del sujeto pasivo del delito que se prolonga más allá de la comisión del robo y que está, además, presidida por una intención ajena o adicional a obtener el efectivo apoderamiento de la cosa, nos encontramos ante delitos diferentes que han sido cometidos a través de acciones que, aunque estén relacionadas son independientes, resultando de aplicación lo previsto para los casos de concurso real de delitos. Así, estos hechos se han de sancionar conforme

a lo dispuesto en el artículo 73 CP, imponiéndose al autor de estos la pena aparejada tanto al delito de robo con intimidación como al de detención ilegal<sup>37</sup>.

La Audiencia Provincial de Cantabria también diferencia entre estas tres realidades siendo especialmente relevante, entre otras, la SAP 51/2015 de 11 de febrero, dada la claridad de su exposición en este sentido. En este pronunciamiento, el Tribunal comienza recogiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo asumiendo los tres supuestos que nuestro más alto Tribunal diferencia en los casos de robo con violencia o intimidación en los que se produce una concurrente detención ilegal: si esta está ínsita en el delito de robo estamos ante una situación de absorción o ante un concurso aparente de leyes, si es un medio necesario para cometer el robo estamos ante un concurso medial o si está desconectada con el fin de apoderamiento, estamos entonces ante un concurso real; y a continuación asume que es preciso realizar un estudio individualizado caso a caso para determinar cuando estamos ante una realidad u otra. Este estudio es precisamente lo que le lleva a condenar por un delito de robo con violencia en concurso real con tres delitos de detención ilegal a un sujeto que tras apoderarse del dinero de los sujetos pasivos del delito, comienza a ejecutar los actos tendentes a privarlos de libertad (coge un cuchillo y los intimida, los obliga a tumbarse en el suelo, tranca la cerradura, etc.) y prolonga dicha privación durante una hora, aún habiéndole asegurado que no hay más dinero en la casa.

Esta relación concursal también ha sido analizada por la Doctrina en numerosas ocasiones diferenciando igualmente entre tres supuestos en función de la relación entre uno y otro delito. En este sentido se ha pronunciado, entre otros, QUINTERO OLIVARES<sup>38</sup> afirmando que “En el robo violento o con intimidación se puede dar una momentánea privación de la capacidad ambulatoria durante el tiempo en que se fuerza a la víctima a entregar la cosa, y eso quedaría en la condición de concurso de leyes, aunque ese tiempo pueda extenderse algo [...]. Pero salvo esos casos, que son los más frecuentes, la detención ilegal puede en otros supuestos entrar en concurso de delitos, real o ideal,

---

<sup>37</sup> En este sentido, véase REBOLLO VARGAS, R., “Detenciones ilegales y secuestros”, en Álvarez García (Dir.), *Derecho Penal Parte Especial (I)*, 2ª Ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 330 ss.

<sup>38</sup> QUINTERO OLIVARES, G., “Comentario al art. 163 CP” en Quintero Olivares (Dir.), *Comentarios al Código Penal Español, Tomo I*, 7ª Ed., Aranzadi, Tarragona, 2016, pp. 1167 ss.

con el robo violento, cual sucede en los casos en que se obliga a la víctima a ir a su casa y luego a recorrer varios cajeros, o cuando se deja a la víctima maniatada para facilitar la fuga, o cuando toma a las víctimas como rehenes para proteger la huida, o se impide la salida a todas las personas que están en el lugar [...]. En cualquier caso, la elección entre el concurso real o medial (recordando que este último es también un concurso real, pero son especial regla punitiva) no puede dejarse, como se ve en algún fallo y en alguna opinión, a merced de que la privación de libertad ambulatoria la padezca la misma persona que sufre el despojo patrimonial; ni tampoco de que la privación de libertad sea previa o siguiente al apoderamiento patrimonial. Se trata, en primer lugar, de bienes jurídicos diferentes, y por lo mismo la víctima lo puede ser de dos delitos distintos que no tienen que estar en relación medio-fin, aunque en algún caso se haya programado así [...] y así se pueda castigar. Pero en otros en los que el ataque a la libertad ajena surge como decisión durante la ejecución o al terminarla, será más adecuada la calificación de concurso real”.

### 3.3. DELITO DE ROBO CON FUERZA SOBRE LAS COSAS O VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN SOBRE LAS PERSONAS Y ALLANAMIENTO DE MORADA.

El delito de robo con fuerza puede ser cometido y es de hecho algo que ocurre de manera muy habitual, en una vivienda, en un establecimiento comercial, bancario, etc. En estas situaciones es innegable que además de ponerse en peligro el patrimonio también se encuentran en una situación de riesgo otros bienes como son la intimidad de las personas, cuando se accede a su hogar e incluso su integridad si sorprenden al autor del robo<sup>39</sup>. La conducta consistente en entrar o permanecer en la morada ajena o en el domicilio de una persona jurídica contra la voluntad de su morador o titular recibe su reproche penal a través del delito de allanamiento de morada, previsto en el art. 202 CP y de allanamiento de domicilio de persona jurídica en el art. 203 CP.

Cuando este allanamiento, tanto activo como omisivo, se encuentre en una relación medio-fin con el apoderamiento que pretende el autor de un delito de robo, es cuando cabría aplicar el tipo cualificado del art. 241 CP. Es, por tanto, necesario

---

<sup>39</sup> QUINTERO OLIVARES, G., “Comentario al art. 241 CP”, en Quintero Olivares (Dir.) *Comentarios al Código Penal Español, Tomo II*, 7ª Ed., Aranzadi, Tarragona, 2016, pp. 63 ss.

determinar si la aplicación de este tipo excluye la aplicación del tipo de robo con fuerza en concurso con el delito de allanamiento.

En primer lugar, hemos de concretar en qué supuestos procede la aplicación de la agravación por realizarse la conducta en “Casa habitada, edificio o local abierto al público, o en cualquiera de sus dependencias”. El concepto de casa habitada ha sido definido por el propio Legislador en el apartado segundo de este artículo que estamos analizando como “Todo albergue que constituya morada de una o más personas, aunque accidentalmente se encuentren fuera de ella cuando el robo tenga lugar.” Nos encontramos así con un elemento normativo del delito ya que, de no existir esta descripción, probablemente de forma común, no se entendería de forma tan amplia este concepto. La Jurisprudencia, no obstante, ha tenido que pronunciarse a efectos de aclarar este artículo precisando que se entiende por morada y considera que esta es *[e]l lugar donde una o varias personas desarrollan una parte de su actividad vital, erigiéndola en un espacio inmune a cualquier intromisión que no esté amparada por la ley*. Con esta definición de casa habitada se diferencia claramente esta idea de otros conceptos relacionados que se manejan en derecho como son el de domicilio civil o de domicilio habitual y además permite incluir dentro de este tipo cualificado los delitos de robo con fuerza cometidos no solo en casas, sino también otros edificios que cumplan idéntica función de morada y centro de actividad vital, protegiéndose de esta manera la esfera de la vida íntima y familiar que se desarrolla dentro de cada uno de ellos<sup>40</sup>. Así, el Tribunal Supremo ha considerado como casa habitada a efectos de este artículo las habitaciones de hotel (STS de 30 de octubre de 1992), las habitaciones alquiladas en una propiedad ajena (STS de 25 de febrero de 1991), las residencias vacacionales (STS de 19 de junio de 1992), los portales y otros elementos comunes de los edificios (STS 1881/1987 de 23 de

---

<sup>40</sup> DE LA CUESTA AGUADO, P. M., “Allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas”, en Álvarez García (Dir.), *Derecho Penal Parte Especial (I)*, 2ª Ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, p. 811: “El concepto de morada, a efectos del delito de allanamiento, es autónomo de otros conceptos de domicilio o del concepto de vivienda habitual del art. 241.2 CP y se trata de un espacio que ha de destinarse a las actividades propias de la vida íntima y familiar [...] La actualidad de uso hace referencia a la vigencia de la relación entre el morador y la morada en virtud de la cual es voluntad del sujeto desarrollar su privacidad en dicho espacio (que se encuentra bajo su dominio y dependiente de su voluntad). Desde esta perspectiva, la protección de la morada abarca a los accesorios o aledaños que constituyan el entorno de la vida privada de los moradores donde estos ejercen y desarrollan su personalidad”.

octubre) etc. Por el contrario, no se entiende como casa habitada una oficina, aunque frecuentemente su propietario durmiera allí (SAP de Alicante 247/2015 de 20 de mayo).

Para aplicar esta agravación resulta irrelevante que haya, en el momento de comisión de los hechos, moradores dentro de la vivienda, ya que a la vista del fundamento de la cualificación de esta conducta, la mayor peligrosidad para la vida y salud y la protección de la intimidad, nada puede garantizar al autor de los hechos que los ocupadores de la vivienda vayan a aparecer en cualquier momento mientras está ejecutando la acción<sup>41</sup>, de tal manera que se materializaría el peligro concreto y porque estén o no, la intimidad de su hogar se está viendo ya vulnerada<sup>42</sup>.

Por el contrario, no nos encontramos con referencia normativa alguna que indique qué ha de entenderse por edificio o local abierto al público por lo que se hace necesario acudir a qué ha dispuesto la Jurisprudencia en este sentido. Así, el Tribunal Supremo, en sentencias tales como la STS de 20 de julio de 2001, de 21 de noviembre de 1997, determina que tendrá la consideración de estos lugares *[t]odo aquel cuyo acceso no está limitado a terceras personas, sino que se encuentre libre para que pueda entrar quien así lo desee*. Esta definición sostenida tiene como elemento central el que pueda acceder

---

<sup>41</sup> En este sentido, QUINTERO OLIVARES, G., “Comentario al art. 241”, cit., p. 64: “El Código Penal ofrece una definición de casa habitada, en la que salva la ausencia temporal de sus inquilinos. La ausencia temporal no debe confundirse con la presencia esporádica. Se trata (la ausencia) de una excepción y, por lo tanto, la comisión de robos en segundas residencias no habitadas habitualmente no debe entrar en la cualificación. A este respecto, el Tribunal Supremo ha fundamentado la existencia de la agravante en que, además de suponer una mayor peligrosidad, tiene un mayor contenido de injusto por el ataque a la intimidad de quienes habitan la casa, y ha entendido aplicable la agravante en los casos en que se da ausencia esporádica del morado. Pero ha admitido también su aplicación cuando se trata de segundas residencias incluso ha considerado morada la habitación de un hotel ocupada por un huésped”.

<sup>42</sup> Sentencias del Tribunal Supremo de 1 de marzo 1990, de 15 de marzo de 1991, o 19 de julio de 1993: *Se combate, no solo la peligrosidad del robo en casa habitada ajena (incluso cuando el delincuente se haya cerciorado de la ausencia de los moradores), sino también la mayor antijuridicidad que acompaña al ataque suplementario a lo que constituye marco de intimidad merecedor de protección añadida. Se incluye en el concepto de casa habitada la llamada segunda vivienda, si está habitada; poniéndose también de relieve que es irrelevante el que los sujetos se cercioraran previamente de la ausencia de los habitantes, porque por casa habitada ha de entenderse la destinada a habitación de sus moradores, aunque tan sólo lo sea en fechas inciertas o indeterminadas, no siendo preciso que lo sea de manera permanente, ya que cualquier persona puede tener más de una morada, siempre que sirvan de habitación con posibilidad, por tanto, de presentarse en cualquier momento el morador ausente*.



libremente la gente, lo que va en concordancia con la *ratio legis* de esta previsión, que busca precisamente proteger a los que puedan estar allí presentes. Sin embargo, a nuestro juicio parece que olvida un elemento esencial, que es el que aporta precisamente la propia definición de establecimiento, que es que se trate de un lugar donde habitualmente se ejerza una industria o profesión. Por lo tanto, lo relevante para que un edificio adquiriera esta consideración es que esté destinado a la prestación de un servicio o producción de un bien, y que sea adecuado para que el público acceda a su interior, que, de forma genérica, cualquier persona pueda acceder a él.

Por último, el Legislador se anticipa a un problema que puede plantearse en la práctica, previendo que esta modalidad cualificada del delito se aplique cuando este se cometa en cualquiera de las dependencias de los lugares antes mencionados y en el artículo 241.3 CP indica que serán tales “Los patios, garajes y demás departamentos o sitios cercados y contiguos al edificio y en comunicación interior con él, y con el cual formen una unidad física”.

El párrafo segundo del artículo 241.1 CP que estamos analizando, recoge una modalidad privilegiada de este tipo cualificado, que ha de apreciarse cuando “Los hechos se hubieran cometido en un establecimiento abierto al público, o en cualquiera de sus dependencias, fuera de las horas de apertura” y prevé en este caso una pena de prisión aparejada al delito de dos a cinco años, menor que la prevista si el establecimiento está abierto, pero en todo caso mayor que la de la modalidad básica de robo. En estas situaciones, no persisten las razones que justifican una agravación de la conducta por el lugar de comisión: no se produce un abuso de la confianza depositada por el sujeto pasivo en el autor de los hechos, ni se pone en riesgo al público que estuviera en el lugar en cuestión. La fundamentación de la agravación en este caso no parece tan clara, pero hay quien afirma en que, al estar el establecimiento cerrado, se compromete la intimidad, e incluso se pone en peligro a las personas que puedan permanecer en estos tras el cierre, tales como reponedores, vigilantes de seguridad, limpiadores, etc. Con esta previsión se ha puesto solución a un problema que se planteaba tanto la Doctrina como la Jurisprudencia y era el de si procedía aplicar la agravación del robo cometido en un establecimiento abierto al público aun cuando este estuviera fuera de sus horas

comerciales, lo que no estaba previsto expresamente<sup>43</sup>, entendiéndose mayoritariamente que no era posible, ya que de hacerlo se estaría extendiendo por analogía una agravación, algo inadmisibles en el ámbito del derecho en el que nos movemos. Así lo afirmó el Tribunal Supremo en su Acuerdo no Jurisdiccional de 22 de mayo de 1997 de la siguiente manera: *[u]n edificio o local no debe estar especialmente protegido frente al robo por el mero hecho de que su destino sea estar abierto al público. La especial protección debe quedar reservada para cuando, efectivamente, está abierto al público. Un local o edificio abierto al público de una parte, es más fácilmente vulnerable que uno cerrado puesto que cualquiera puede entrar en él y, por otra, en el mismo suele haber una pluralidad de personas, normalmente confiadas y atentas sólo a la actividad que en el mismo se desarrolla, por lo que un eventual atentado a la propiedad, tanto más si se realiza mediante el empleo de fuerza en las cosas, causa una alarma considerablemente mayor, tanto por su lógica transcendencia como por lo que tiene de atentado a la colectiva creencia de encontrarse en un ámbito de relativa seguridad.*

Una vez clarificado su ámbito de aplicación, se nos plantea entonces la cuestión de cómo han de relacionarse estos preceptos de manera que se ofrezca una respuesta penal adecuada a los mismos: podríamos entender que se trata de un concurso medial, en el que el allanamiento es un medio o instrumento para cometer el robo, en la modalidad que corresponda o bien, que el delito de robo en casa habitada o edificio o local abierto es un delito complejo, en el que ya se integra esta conducta y que esta situación se ha de resolver conforme a lo previsto para el concurso de leyes.

La Jurisprudencia opta por esta segunda solución, es decir, entiende que el delito de robo agravado por cometerse en uno de estos lugares subsume el delito de allanamiento de morada y que la concurrencia de normas, en realidad no es tal, ya que únicamente el tipo de robo agravado es aplicable al entender que el ánimo de lucro absorbe el ánimo de allanar y la aplicación del tipo agravado es suficiente para sancionar de forma plena el

---

<sup>43</sup> GORRIZ ROYO, E. M., “Delitos de robo: arts. 237, 240, 241 y 242 CP”, en González Cussac (Dir.), *Comentarios a la reforma del Código Penal de 2015*, 2ª Ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 691.

desvalor de la conducta.<sup>44</sup> Esta solución viene dada por la aplicación de las reglas previstas en el artículo 8 del CP, a propósito del concurso de leyes, y, en concreto, por el Principio de Absorción, que implica que cuando una conducta está descrita de forma más detallada e incluye entre sus elementos alguno que es constitutivo de un delito de forma autónoma, se ha de sancionar por la conducta más extensa de ellas.

En este sentido el Tribunal Supremo en diversas sentencias, entre las que merece mención específica la STS 972/2016 de 21 de diciembre o la STS de 2 de julio de 1979, afirma lo siguiente: *[e]l fundamento de la agravación específica de casa habitada tradicionalmente se mantiene en la mayor peligrosidad del agente que no vacila en realizar la sustracción en un inmueble en el que hay o puede haber moradores con los consiguientes riesgos y posibilidad de tener que afrontar la presencia y resistencia de éstos, así como las consecuencias derivadas y previsibles de que a la fuerza en las cosas se agregue o añada algún mal o perjuicio para las personas; debiéndose adicionar que esta motivación principal no excluye otra complementaria, la idea de renovada consagración legal de la cantidad del hogar, integrando la figura estudiada a modo; de un innominado robo con allanamiento de morada en el que éste se subsume en el primero o queda absorbido por él.*

Por lo tanto, podemos afirmar que el riesgo protegido por el delito de allanamiento de morada, tanto para las personas como para su intimidad, queda ya cubierto por el tipo cualificado de robo en casa habitada o edificio o local abierto al público y esta cualificación da cobertura a la totalidad del desvalor de la acción<sup>45</sup>.

---

<sup>44</sup> GALLEGU SOLER, J. I., “Delitos contra bienes jurídicos patrimoniales de apoderamiento”, cit., pp. 523 ss.: “El principal problema concursal es la relación que media con el allanamiento de morada (art.202) y el allanamiento de domicilio de persona jurídica (art.203). el robo, incluso en la modalidad agravada del art.241, absorbe el allanamiento de morada para la jurisprudencia mayor porque el ánimo de lucro absorbe el dolo de allanar, salvo que concurra el ánimo de atentar contra la intimidad puesto que, si el ataque a la privacidad va mas allá del necesario para cometer el robo, estamos ante concurso de delitos entre robo y allanamiento de local abierto al público”.

<sup>45</sup> DE LA CUESTA AGUADO, P. M., “Allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas”, cit., p. 816.

Esta misma solución es la que hoy en día se ofrece para los supuestos de concurrencia entre los delitos no ya de robo con fuerza sobre las cosas sino con violencia o intimidación sobre las personas y los delitos de allanamiento de morada, al haberse introducido en el Código Penal a través de las reformas operadas por la LO 5/2010 y por la LO 1/2015, esta cualificación para esta modalidad de robo. No obstante, es necesario precisar respecto de los locales o edificios abiertos al público que en el caso del robo violento o intimidatorio el tipo cualificado únicamente podrá aplicarse cuando este se produzca dentro de su horario de apertura. Esto se explica porque si el fundamento de la agravación se encuentra en el mayor peligro que existe para la vida o integridad física de las personas no tendría sentido su aplicación cuando es probable que no haya personas presentes. Además, en tanto que en el caso del robo con fuerza el Legislador prevé expresamente la sanción de este aún cuando al cometerse en un establecimiento abierto al público este esté cerrado, al no hacerlo aquí parece claro que su voluntad ha sido no sancionar esta conducta<sup>46</sup>.

Con anterioridad a su publicación, la agravación del robo por cometerse en uno de estos lugares únicamente se contemplaba para los casos de robo con fuerza sobre las cosas, de tal manera que estas situaciones se entendían como un concurso de leyes, y se resolvían conforme a las reglas del artículo 8, es decir, se daba la solución que actualmente se mantiene. No obstante, respecto del robo con violencia o intimidación sobre las personas no se preveía esta agravación de tal manera que cuando se cometía este delito en una casa habitada o en un edificio o local abierto al público, se entendía que aplicando la modalidad básica del delito de robo con violencia o intimidación no se daba respuesta a la totalidad de la acción del sujeto y que este cometía además de este delito, el delito de allanamiento de morada, dando lugar estas situaciones a un concurso de delitos. Este concurso se resolvía a través de las reglas del concurso medial mayoritariamente y en un menor número de ocasiones a través del concurso real<sup>47</sup>. Esta posición fue la defendida por la Fiscalía General del Estado en una consulta que sobre

---

<sup>46</sup> GORRIZ ROYO, E. M., “Delitos de robo: arts. 237, 240, 241 y 242 CP”, cit., pp. 691 ss.

<sup>47</sup> QUINTERO OLIVARES, G., “Comentario al art. 242 CP”, en Quintero Olivares (Dir.), *Comentarios al Código Penal Español, Tomo II*, 7ª Ed., Aranzadi, Pamplona, 2016, p. 66.

esta relación de delitos se les planteó, la consulta 10/1997 de 29 de octubre, sobre robos con violencia o intimidación perpetrados en morada ajena, en la que se acuerda lo siguiente: *[l]a supresión de la agravante de morada y la limitación del tipo agravado de casa habitada al robo con fuerza en el vigente Código Penal conducen a afirmar la compatibilidad entre el delito de robo con violencia o intimidación en las personas y el delito de allanamiento de morada. 2.ª La perpetración de un robo con violencia o intimidación en morada ajena a la que se haya penetrado de forma ilegítima, dará lugar a un concurso entre los delitos de robo y allanamiento que si se da la relación de medio a fin exigida por el art. 77 del Código Penal deberá penarse con arreglo a tal disposición.*

Aplicando este tipo cualificado, el Tribunal Supremo en la STS 1100/2019 de 14 de noviembre, ha confirmado la condena de un sujeto imputado por un delito de robo con violencia sobre las personas en casa habitada al autor de un apoderamiento que con el objetivo de obtener un lucro ilícito, porta una pistola con la que amenaza a la víctima del delito, accede a su vivienda y la registra, entendiendo así que *la víctima se encontraba sin capacidad alguna [...] para evitar la sustracción que, simultáneamente se estaba produciendo, conforme al propósito inicial por el que el acusado y su acompañante accedieron a la vivienda.*

Actualmente, ya que la agravante se prevé para ambas modalidades de robo, se resuelve la cuestión conforme a las reglas previstas para el concurso de leyes, que determinan que se ha de aplicar el tipo de robo agravado únicamente en la modalidad que corresponda.

### 3.4. DELITO DE ROBO CON INTIMIDACIÓN Y DELITO DE AMENAZAS.

La intimidación que caracteriza el delito de robo con intimidación sobre las personas que ha de ser entendida como el ejercicio de presiones psicológicas sobre un sujeto con el fin de condicionar su voluntad, de constreñir su libertad. Esta definición conlleva que esta conducta pueda constituir por sí misma un delito autónomo que lesiona la libertad, como el delito de coacciones, de amenazas o de detención ilegal<sup>48</sup>. A la hora

---

<sup>48</sup> MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal. Parte Especial*, cit., p. 373.

de subsumir una conducta de apoderamiento dentro del delito de robo con intimidación es necesario prestar una especial atención al componente subjetivo, de tal manera que, para apreciar la intimidación basta con que la conducta realizada con la voluntad de coartar la libertad de decisión de la víctima logre efectivamente este objetivo para apreciarse, independientemente del medio que se utilice para hacerlo y de la posibilidad de hacer realidad el mal con el que se amenaza. En este sentido, tal y como señala el Tribunal Supremo en numerosas sentencias, entre las que destacan la STS de 13 de junio de 2000, o de 28 de junio de ese mismo año, *[l]a intimidación ofrece, por su propia naturaleza, una fuerte carga de subjetividad, habrá de atenderse a cada caso concreto y evaluar las condiciones y situación de la persona intimidada, acudiendo también a todas las circunstancias que configuran el escenario de los hechos y que deben quedar reflejadas en los hechos probados, todo ello con el fin de evitar una subjetivación absoluta que dotaría de influencia penal a coacciones morales objetivamente insuficientes.*

Precisando más sobre este concepto de intimidación, la Doctrina busca acotar el componente subjetivo de la intimidación y para ello comienza considerando que una conducta será intimidatoria cuando sea objetivamente idónea para condicionar la voluntad del hombre medio y le añade a esto las circunstancias particulares del caso, como las características del sujeto y el entorno en el que se encaja la acción. Esta intimidación puede ser incluso implícita por derivarse de una relación en la que el autor de los hechos se encuentra en superioridad o en una posición privilegiada respecto de la víctima<sup>49</sup>.

De este modo, un sujeto puede intimidar a otro amenazándole con causarle a él o a sus allegados un mal, sea este o no constitutivo de delito. Esta conducta, de verificarse el resto de los elementos del delito, da lugar a la comisión de un delito de amenazas, lo que plantea el debate sobre si estas amenazas han de castigarse de forma autónoma e independiente al delito de robo, dando lugar a un concurso entre ambos delitos o si, por el contrario, estas se encuentran dentro del tipo penal del robo con

---

<sup>49</sup> ALVAREZ GARCIA, F. J., “Robo con violencia o intimidación en las personas y extorsión” en Álvarez García (Dir.) *Derecho Penal Español, Parte Especial (II)*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp.145 ss.

intimidación, dando lugar a un concurso de leyes, en el que únicamente una norma resulta aplicable.

Un primer problema que se plantea es el de la diferenciación del robo con intimidación con las amenazas condicionales lucrativas, aquellas destinadas a conseguir un desplazamiento patrimonial a favor del autor del delito mediante el apercibimiento de la causación de un mal. Para resolver estas situaciones lo determinante es el momento en el que esta amenaza se haría efectiva: si este momento es inmediato, estamos ante un delito de robo con fuerza y si, por el contrario, este momento es futuro, habiendo recuperado el sujeto que las sufre su capacidad de decidir libremente, estamos ante un delito de amenazas<sup>50</sup>. Esta línea es la que se ha seguido por el Tribunal Supremo, y encontramos su argumentación en sentencias tales como la STS de 27 de octubre de 1982 o la STS de 16 de enero de 1991, que sintetizan lo que acabamos de exponer de la siguiente manera: *[l]a distinción del delito de amenazas condicionales lucrativas, y el delito de robo con violencia o intimidación en las personas, en el que la intimidación consista en amenazas, estriban en que en este último delito el mal que lleva en sí la amenaza se presenta ante la víctima como inmediato e inminente, produciendo el simultáneo o inmediato desplazamiento patrimonial a favor del agente; mientras que en el delito de amenazas condicionales lucrativas las amenazas conminan con el mal para un futuro más o menos próximo pero no inmediato -SS. de 28 marzo 1891, 16 junio 1900, 15 junio 1910, 13 febrero 1942 ( RJ 1942\266) y 20 enero 1944 ( RJ 1944\63) etc.-. La víctima dispone de tiempo para poder buscar medios de defenderse, y evitar la expoliación.*

Resuelta esta cuestión inicial, ha de analizarse los supuestos de concurrencia de estos dos delitos. Existe una clara posición mantenida por nuestra Jurisprudencia que consiste en defender que la conducta constitutiva *a priori* de un delito de amenazas es en realidad una manifestación de la intimidación que se requiere para apreciar el delito de robo, el medio de comisión de este delito, de tal manera que la subsunción de unos hechos en este último delito ya sanciona las amenazas, siendo la aplicación del delito de robo

---

<sup>50</sup> MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal. Parte Especial*, cit., p. 378.

suficiente para dar cobertura a la totalidad del desvalor de la acción realizada por el sujeto. Es decir, estamos en estos casos ante un concurso de leyes que se resuelve conforme al Principio de Consunción, recogido en el art. 8.3 CP y, en este sentido, nos encontramos con sentencias como la STS 70/2019 de 28 de marzo: *[c]iertamente, hemos dicho (STS 710/16 , de 21 de septiembre ), que cabe aplicar el principio de absorción ( art. 8.3º CP ) cuando las amenazas son el medio utilizado para la comisión del delito de robo, de modo que el delito de amenazas se lleva a cabo durante la ejecución y para cometer el robo violento, siendo jurisprudencia reiterada que en materia concursal las amenazas, por regla general, quedarán absorbidas por el mayor desvalor del otro delito -concurso de normas, art. 8.3 CP -, en todos aquellos casos en los que éstas se utilicen para afectar a la libertad de obrar específicamente protegida en determinados ámbitos, como es el caso de delitos de agresiones sexuales o cuando la intimidación constituye un elemento adicional para la concurrencia de un tipo delictivo determinado, como es el caso de los delitos de robo ( STS. 673/2007 de 19.7).*

Este mismo criterio es el que sigue la Audiencia Provincial de Cantabria en sentencias tales como la SAP Cantabria 51/2015 de 11 de febrero, en la que a propósito del enjuiciamiento de un apoderamiento en el que el autor de los profiere una serie de amenazas de muerte y de violación a los sujetos pasivos del delito, no realiza ninguna acción tendente a hacer efectivas dichas amenazas. Así, la citada sentencia reconoce lo siguiente: *[t]ales amenazas han de considerarse absorbidas o consumidas en o por los delitos de robo y detención ilegal (artículo 8-3º del Código Penal), pues en la intimidación propia del robo siempre van ínsitas amenazas, y en el mantenimiento en el tiempo de la detención ilegal también suelen proferirse amenazas, generalmente para tratar de asegurarse el sujeto activo que el sujeto pasivo no va a intentar huir.*

Sin embargo, si que cabría apreciar un concurso de delitos cuando la amenaza vertida sea desproporcionada o innecesaria para lograr el apoderamiento de la cosa o cuando se realicen una vez este se ha producido. El Tribunal Supremo ha admitido la existencia de un concurso real de delitos en estos casos. En concreto en la STS 710/2016 de 21 de septiembre, tras sistematizar la jurisprudencia que recoge qué supuestos de concurrencia entre las amenazas y el robo han de entenderse como un concurso de leyes, dispone que en el caso en cuestión no es aplicable: *[n]o obstante, si como dice el tribunal,*



*las amenazas son posteriores al robo, nos encontraremos ante un delito en concurso real con los anteriores, en tanto que no es de imprescindible comisión. La sala sentenciadora funda la autonomía de las amenazas en dos puntos: la gravedad de las amenazas, innecesaria para lograr el propósito depredatorio (no solo exhiben las armas, sino que encañonan a la víctima, le colocan el cuchillo en el cuello y le amenazan de muerte mientras le preguntan por la droga y el dinero) y el momento en el que se producen, posterior al apoderamiento.*

Un ejemplo que se plantea en la práctica de forma muy frecuente que ha de ser calificado como un concurso de delitos entre el delito de robo y el delito de amenazas es aquel en el que el autor de los hechos, una vez logrado el apoderamiento por el medio que fuera, dirige las amenazas a evitar que el sujeto pasivo del delito denuncie los hechos o le identifique como autor de estos<sup>51</sup>. Así, la STS 1020/2007, de 29 de noviembre ante la posición de la defensa que entiende que el delito de amenazas queda embebido dentro del delito de robo con intimidación, considera que *[p]arte el recurrente del error de pensar que el delito de amenazas se comete durante la ejecución del delito, a modo de presión o posición dominante, para cometer el violento robo, la detención ilegal e incluso las agresiones sexuales, cuando es lo cierto que tales amenazas, que el autor del recurso considera en un todo típicas fuera de tal contexto, son expresión de futuro, y para el caso de que denunciase (poniéndose a cubierto los autores de cualquier actuación policial), o de acto que impida seguir extrayendo dinero de tales tarjetas en días sucesivos, lo cual excede con mucho del planteamiento del recurrente, y debe ser considerado como un delito en concurso real con los anteriores, pues ni es de imprescindible comisión, ni necesariamente forma parte del actuar de los autores de estos hechos.*

### 3.5. DELITO DE ROBO CON INTIMIDACIÓN Y COACCIONES.

Semejante controversia a la que se plantea en las situaciones de concurrencia entre el delito de robo con intimidación o violencia y el delito de amenazas se plantea entre el primero y el delito de coacciones, tipificado en el art. 171 CP y que consiste en, mediante

---

<sup>51</sup> ÁLVAREZ GARCÍA, F. J., “Robo con violencia o intimidación en las personas y extorsión”, cit., pp.156 ss.

el uso de acciones violentas, impedir a un sujeto hacer lo que la ley no le prohíbe u obligarle a hacer algo que no quiere. Este concepto de violencia que inicialmente fue equiparado únicamente con la vis física, es decir, con aquellos supuestos de violencia física como tal, ha sido interpretado por la Jurisprudencia de forma extensiva de tal manera que se ha ido ampliando su ámbito de aplicación a supuestos de *vis compulsiva* e incluso *vis in rebus*<sup>52</sup>.

La cuestión es entonces determinar si estas acciones intimidatorias constitutivas de un delito de coacciones han de valorarse de forma independiente a través de este tipo penal en relación de concurso de delitos con el delito de robo con intimidación o si como forma de intimidación que son, ya se recogen dentro del delito de robo con intimidación y el castigo que se ofrece a esta conducta ya las toma en cuenta y no merecen un reproche aislado. En este caso se viene adoptado la misma solución que en el caso de las amenazas: en la medida en la que la conducta coactiva puede ser el medio para cometer el robo constituyendo la violencia o intimidación de la que su autor se sirve para apoderarse de la cosa, se considera que son inherentes al delito de robo y que el Legislador a la hora de imponer la sanción por su comisión ya valora la coacción que, considera aisladamente sin ser instrumental al robo, sería constitutiva de un delito de coacciones. En consecuencia, se han de sancionar los hechos únicamente como constitutivos de un delito de robo en aplicación de lo dispuesto en el art. 8.3 CP <sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> STS 623/2013, de 17 de julio: *La vis o fuerza empleada por el sujeto activo del delito de coacciones no solo comprende los casos de violencia física como tal, sino que incluye cualquier ataque a la voluntad de la víctima, pues con ello también se limita su libertad. Y en este sentido, el concepto de violencia ha ido ampliándose para incluir también la intimidación o "vis compulsiva" e incluso la fuerza en las cosas o "vis in rebus" siempre que repercuta en la libertad de la persona para el pacífico disfrute de sus derechos (STS. 628/2008 de 15.10, 982/2009 de 15.10). La mera restricción en la libertad de obrar supone de hecho una violencia y, por tanto, una coacción, siendo lo decisivo el efecto coercitivo de la acción más que la propia acción. Esta utilización del medio coercitivo ha de ser adecuada, eficaz y causal respecto al resultado perseguido (STS. 843/2005 de 29.6).*

<sup>53</sup> MIR PUIG, S., "El delito de coacciones en el Código Penal", en *Anuario de Derecho Penal y ciencias penales*, Tomo 30, Nº2, 1977, p. 30.: "El concurso de delitos dejará paso al de leyes cuando lo imponga el principio de consunción. Ello podrá suceder en dos sentidos distintos: por una parte, cuando el específico delito de que se trate implique normalmente una lesión de la libertad de la víctima. Así, por ejemplo, aunque las lesiones graves suponen como consecuencia impedir al sujeto pasivo servirse de alguno de sus órganos o incapacitarle para su vida normal por cierto tiempo, según el principio de consunción se estimarán solo lesiones graves. Por otra parte, cuando la violencia empleada para coaccionar no posea mayor gravedad que la normalmente necesaria para doblegar la voluntad ajena, como cuando se acude a

En este punto hay que recordar que la intimidación y la violencia que integran los tipos del delito de robo han de ser instrumentales a este, de tal manera que si se realizan una vez el sujeto ha logrado el efectivo apoderamiento de la cosa darán lugar a la comisión de otros delitos, entre otros, el de coacciones. En estos casos no hablaríamos ya de un concurso de leyes, sino de un concurso de real de delitos por ser más de una acción la que da lugar a la comisión de varios delitos, sin que una sea el medio necesario para realizar la otra. Así ha sido apreciado por el Tribunal Supremo en la STS 2206/2001 de 23 de noviembre o la STS 131/2000 de 2 de febrero: *[m]ientras respecto al apoderamiento de la moto, la Sentencia describe una actitud intimidante, suficiente para el robo, para la obtención de 50.000 pesetas se desplegó también una fuerza compulsiva, pero no la misma ni totalmente coincidente con la ya previamente ejercida. Se inspiró a la víctima el temor de quedarse definitivamente sin la moto previamente sustraída para imponerle coactivamente la entrega de dinero. En tales supuestos, cabría pensar en un delito de robo, pero la ausencia del elemento cronológico de inminencia tanto en el anuncio del mal como en la exigencia de cantidad, obligan a incardinar los hechos en la figura más genérica de coacciones que admite casos en que como ahora se exige o impone una condición (lícita o no) cuyo cumplimiento no se hace inminente; al contrario, se difiere a un momento ulterior. Ha de rechazarse el motivo.*

Por último, es necesario mencionar que, en el caso en el que la violencia ejercida sea constitutiva de un delito de lesiones si que se apreciaría un concurso de delitos, pero no ya entre el robo con violencia o intimidación y las coacciones que estamos analizando, sino entre el primero y el delito de lesiones<sup>54</sup>.

---

malos tratos de obra constitutivos de falta, en cuyo caso deberá apreciarse únicamente el delito de coacciones.”

<sup>54</sup> CUERDA ARNAU, M. L., “Delitos contra la libertad (y II): Amenazas. Coacciones”, en González Cussac (Dir.), *Derecho Penal Parte Especial*, 6ª Ed, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 178 ss.

### 3.6. DELITO DE HURTO O DE ROBO AGRAVADO POR SER EL AUTOR MIEMBRO DE UNA ORGANIZACIÓN O GRUPO CRIMINAL Y DELITO DE PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN O GRUPO CRIMINAL.

Otra de las circunstancias agravantes del delito de hurto, que es aplicable también al delito de robo por la vía del art. 242.4 CP prevista en el art. 235.1.9 CP, para los supuestos en los que “El culpable o culpables participen en los hechos como miembros de una organización o grupo criminal que se dedicare a la comisión de delitos comprendidos en este título, siempre que sean de la misma naturaleza” puede plantear problemas en sede concursal al ser necesario determinar si es compatible su aplicación con el delito de pertenencia a organización o grupo criminal, previsto en los arts. 570 bis y ter. El problema que aquí se plantea es que la circunstancia que se utiliza para cualificar el delito de hurto es, al mismo tiempo, constitutiva de un delito autónomo del art. 570 bis o 570 ter según corresponda y lo que resulta incuestionable es que no se puede condenar simultáneamente aplicando ambos preceptos porque se estaría conculcando el Principio *non bis in idem*.

Para analizar en qué supuestos procede su aplicación hemos de comenzar por acotar los conceptos de organización criminal y de grupo criminal, tratándose en ambos casos de elementos normativos del delito y que se definen respectivamente en los artículos 570 bis y 570 ter de la siguiente manera: “A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos y [a] los efectos de este Código se entiende por grupo criminal la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos”.

El grupo criminal se configura así como una figura residual respecto de la organización, aplicándose cuando no se reúnen todas las características de esta. Para que una agrupación tenga la consideración de organización criminal ha de reunir los siguientes requisitos que se infieren del art. 570 bis: ha de ser una agrupación formada por más de dos personas, tener carácter estable o estar constituida por tiempo indefinida, sus miembros han de repartirse las tareas o funciones de manera concertada o coordinada

y, por último, ha de tener como finalidad la comisión de delitos. Cuando esta agrupación pese a constituirse para la comisión de delitos no tenga carácter estable o sus miembros no tengan una función asignada dentro de la organización es cuando ya nos encontramos con un grupo criminal<sup>55</sup>. Esta noción hace imprescindible diferenciar el grupo criminal de los supuestos de mera coautoría, ya que en este último caso no procedería aplicar ni los tipos penales que castigan la delincuencia organizada ni las agravaciones para determinados delitos concretos cuando sean cometidos por quienes reúnan estas características, como es el caso de la disposición que estamos analizando. Supuestos de codelincuencia son aquellos en los que la unión es únicamente de dos personas o aún cuando siendo más, dicha unión se ha formado fortuitamente para cometer de forma inmediata un delito<sup>56</sup>.

Además, se establece la concurrencia de otros dos requisitos: que el autor de los hechos actué como integrante de esta organización o grupo y que estos se dediquen a la comisión de delitos del Título XIII que tengan la misma naturaleza que el delito de robo o de hurto. Esta previsión implica, por un lado, que los autores lo han de ser de una pluralidad de delitos ya que el Legislador exige la comisión de delitos, en plural, para poder aplicar esta circunstancia agravante y, por otro lado, que sean delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico y de la misma naturaleza<sup>57</sup>. La identidad en la naturaleza de los delitos se produce cuando los delitos en cuestión protegen el mismo bien jurídico y la modalidad comisiva sea semejante<sup>58</sup>. A propósito de esta cuestión se ha pronunciado el Tribunal Supremo estimando que no existe la identidad de naturaleza entre

---

<sup>55</sup> MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal. Parte Especial*, cit., pp. 812 ss.

<sup>56</sup> Sentencias del Tribunal Supremo 706/2001 de 27 de junio o 223/2012 de 20 de marzo: *La jurisprudencia ha distinguido, pues, entre participación plural de personas, encuadrable en el ámbito de la coautoría, y aquella otra que se integra en una modalidad agravada, al hallarse configurada por varias personas coordinadas que integran un aliud y un plus frente a la mera codelincuencia, por hallarse integrada por más de dos personas y no haberse formado fortuitamente para la comisión inmediata de un solo delito.*

<sup>57</sup> DEL CARPIO DELGADO, J., “Análisis de las circunstancias agravantes comunes al hurto y al robo con fuerza en las cosas”, en Carpio Delgado (Dir.), *Algunas cuestiones de Parte Especial tras la Reforma de 2015 del Código Penal*, Valencia, 2018, pp. 187 ss.

<sup>58</sup> QUINTERO OLIVARES, G., “Comentario al art. 235 CP”, en Quintero Olivares (Dir.), *Comentarios al Código Penal Español, Tomo II*, 7ª Ed., Aranzadi, Pamplona, 2016, pp. 38 ss.

los delitos de hurto y de robo con fuerza y los delitos de hurto y de robo con violencia o intimidación sobre las personas<sup>59</sup> porque aunque ambos delitos protejan el mismo bien jurídico, el patrimonio, el modo de comisión es diferente por exigirse en las modalidades de robo un empleo de energía extra, ya sea a través de la fuerza, de la violencia o de la intimidación, para superar los obstáculos que separan al autor de la conducta del objeto de apoderamiento. Sin embargo, al concurrir en el robo con fuerza sobre las cosas y el robo con violencia o intimidación este esfuerzo para vencer el obstáculo puesto por la víctima del delito si que se entiende que existe identidad de naturaleza entre uno y otro delito<sup>60</sup>.

La pertenencia a un grupo u organización criminal que aquí se utiliza para cualificar la conducta se configura asimismo en el Código Penal como un delito autónomo. Puesto que no es posible sancionar dos veces por los mismos hechos, se hace necesario resolver y ofrecer solución a esta concurrencia, determinando si estamos ante un concurso de leyes o un concurso de delitos y aplicando unas reglas u otras según corresponda. Así pues, en caso de considerar que la aplicación del tipo agravado abarca ya el total del desvalor de la conducta estaríamos ante un concurso de leyes, mientras que, si para sancionar la totalidad de esta es necesario, además de aplicar el delito de hurto o robo, el delito de pertenencia a un grupo u organización criminal estaríamos ante un concurso de delitos.

El propio Código Penal en el art. 570 quarter 2 *in fine* regula cómo han de resolverse estos supuestos y dispone que “En todo caso, cuando las conductas previstas en dichos artículos estuvieren comprendidas en otro precepto de este Código, será de

---

<sup>59</sup> STS 1973/2001, de 9 de octubre: *La agravante de reincidencia exige que la condena anterior haya sido por delito comprendido en el mismo Título y que sea de la misma naturaleza. La primera exigencia se da entre el delito de hurto y el de robo, tipificados en los Capítulos Primero y Segundo, respectivamente, del Título XIII. Pero no concurre en ellos la misma naturaleza pues, aunque atacan el mismo bien jurídico protegido, la modalidad comisiva de ambos es muy diversa en cuanto en el robo se precisa una superación de obstáculos puestos por la víctima para impedirlo, que no concurre en el hurto, caracterizado por el simple apoderamiento de lo que se halla al alcance del sujeto.*

<sup>60</sup> Acuerdo del TS de 6 de octubre de 2000: *Se acuerda que podrá apreciarse la circunstancia agravante de reincidencia entre delitos de robo con violencia o intimidación y delitos de robo con fuerza en las cosas, por considerarse ambos de la misma naturaleza delictiva, siempre que concurren los demás elementos necesarios para su apreciación.*

aplicación lo dispuesto en la regla 4.<sup>a</sup> del artículo 8<sup>o</sup>. Este art. 8.4 CP determina que, ante la imposibilidad de resolver la concurrencia conforme a otros criterios, se ha de aplicar de los preceptos concurrentes aquel que castiga la conducta con una pena mayor.

De la dicción literal de la ley se desprende que la conducta se ha de castigar con la pena más grave de aquellas concurrentes, ya sea esta la resultante de aplicar las reglas previstas para el concurso real entre el hurto o el robo y la pertenencia a grupo u organización criminal o aplicar únicamente el delito de hurto o del robo en su modalidad agravada. Esta subsunción del hecho en el tipo más gravemente penado se muestra coherente con la intención del legislador al prever este tipo de cualificaciones de luchar contra la delincuencia organizada especialmente en relación con aquellos delitos en los que más actúa. Esta es precisamente la postura que se sigue en nuestros tribunales<sup>61</sup>.

Esta posición nos lleva a afirmar, en primer lugar, que la concurrencia de normas es aparente, ya que estamos ante lo que se conoce como un concurso de leyes y no de delitos, que se ha de resolver atendiendo a lo dispuesto en el art. 8.4 CP, es decir, imponiendo la pena más grave, ya sea esta la correspondiente al delito de hurto o de robo en su modalidad agravada o al delito de pertenencia a grupo u organización criminal en concurso con el tipo básico del delito de hurto o de robo. Esta posición es la que también sigue la Fiscalía General del Estado en su Circular 2/2011 de 2 de junio en la que se pronuncia a propósito de la relación concursal existente entre el delito de pertenencia a grupo u organización criminal y los delitos que agravan la conducta por esta misma circunstancia y en la que admite que en estos casos la concurrencia se resuelva como un concurso de delitos en la modalidad de concurso real entre este delito y el delito en cuestión en su modalidad básica, sin aplicarse la agravación, cuando la pena resultante si se aplica esta solución sea superior a la que resultaría de aplicar el tipo agravado<sup>62</sup>.

---

<sup>61</sup> En este sentido se ha pronunciado el TSJ de la Comunidad Valenciana en la STSJ 35/2017 de 4 de octubre: *Por lo que en consecuencia tendríamos dos opciones, bien aplicar por el principio de alternatividad la modalidad agravada del artículo 235, para penar los delitos de hurto o robo cometidos por los miembros de un grupo u organización, o bien penar por el artículo 570 bis o 570 ter y por la modalidad básica que corresponda del delito de hurto o robo, según cuál de estas opciones determine una consecuencia punitiva más grave.*

<sup>62</sup> *La pertenencia del sujeto activo a una organización y/o grupo criminal es objeto de subtipos agravados en relación con una serie de delitos cuya perpetración en grupos más o menos organizados es*

No obstante, voces importantes de la Doctrina defienden que estas modalidades concursales han de ser tratadas con las reglas del concurso de delitos y que, en todo caso, se ha de aplicar el delito de pertenencia a grupo u organización criminal porque no puede entenderse que el desvalor total de la acción quede abarcado con una mera agravación del delito<sup>63</sup>. De tal manera que se entiende que existe un concurso de delitos entre el hurto y el robo en su modalidad básica con el delito de pertenencia a grupo u organización criminal.

El Tribunal Supremo no se ha pronunciado muchas veces a propósito de esta concurrencia entre el delito de asociación ilícita y la agravación por este mismo motivo, dada la relativa novedad de esta última ya que ha sido introducida en el Código Penal en la reforma operada a través de la LO 1/2015, de 30 de marzo. Sin embargo, si que encontramos alguna resolución relevante como la STS 419/2018 de 5 de abril en la que opta por seguir la interpretación más apegada posible a lo dispuesto en el art. 570 quater y así dispone lo siguiente *[e]l Tribunal de apelación estimaba que se daba un supuesto del artículo 570 del Código Penal, si bien, a diferencia de lo que ocurría con la sentencia de instancia, consideraba que no se trataba de una organización criminal (supuesto del art. 570, como lo había estimado la Audiencia), sino de un grupo criminal del artículo 570 ter del Código Penal. El Tribunal Superior estimaba que, aunque podría apreciarse una cierta vocación de permanencia en el conjunto de personas que componían la*

---

*especialmente habitual. En tales supuestos se produce un concurso de normas con el delito de pertenencia o dirección de organización o grupo criminal previstos en los arts. 570 bis y 570 ter, pues precisamente la agravación de la pena en el delito específico correspondiente obedece al aumento del injusto que supone la pertenencia a una organización o grupo criminal, cuya existencia facilita la comisión de actividades ilícitas, asegura la eficacia de las mismas y favorece la impunidad de sus autores. Para resolver el conflicto, sin vulnerar el principio non bis in idem, los Sres. Fiscales cuidarán de aplicar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 570 quáter CP, conforme al criterio de alternatividad, un concurso de delitos entre el art. 570 bis o el art. 570 ter, en su caso, y el tipo correspondiente al delito específicamente cometido con todas sus circunstancias si bien prescindiendo de la agravación específica de organización, cuando la pena así aplicada sea superior a la que prevé el subtipo agravado.* [https://www.fiscal.es/memorias/estudio2016/PDF/CIR/CIR\\_02\\_2011.pdf](https://www.fiscal.es/memorias/estudio2016/PDF/CIR/CIR_02_2011.pdf) [Consultado: 30/7/2020]

<sup>63</sup> SANCHEZ MELGAR, J., “Nuevas figuras delictivas introducidas en el código penal por la Ley 1/2015, de 30 de marzo” en *Cuadernos digitales de formación*, N°7, 2016: “Sobre el problema de si en los casos de organizaciones o grupos criminales primará la aplicación de aquellos preceptos sobre tal agravación, o esta sobre aquellos, nos inclinamos sobre el primer punto de vista, sin que se pueda, por la prohibición de la doble valoración, aplicar la agravación específica; no vemos posible que existiendo una verdadera organización delictiva, esta quede neutralizada por la aplicación de tal subtipo agravado, en virtud del principio de alternatividad”.



*denominada "Brigada de Chitila", faltaba la nota esencial de que se tratase de una estructura consolidada y compleja propia de la organización. A partir de esta consideración, el Tribunal Superior de Justicia entraba a dilucidar si entre este precepto y el artículo 235.1. 9º del Código Penal se planteaba un concurso real de delitos o un concurso de normas que debería resolverse, tras la comparativa de las penas correspondientes, por aplicación del artículo 8.4 del mismo texto legal. El Tribunal Superior consideró que la remisión expresa del artículo 570 quater a este último precepto, que implicaba la aplicación del precepto que impusiese la pena más grave, debería primar. Una vez considerado que procedía aplicar el artículo 235.1. 9º del Código Penal, el Tribunal de apelación estimó que el propio tenor literal implicaba la aplicación de esa agravación específica, incluso si el hecho había sido cometido por un solo integrante del grupo. La solución dada por el órgano de apelación resulta correcta.*

En conclusión, si bien existen opiniones jurisprudenciales discordantes, el concurso entre el delito de pertenencia a grupo u organización criminal y el delito de hurto o robo agravado por este mismo motivo ha de ser tratado como un supuesto de concurso de leyes, a resolver aplicando el art. 570 quater CP que remite expresamente al art. 8.4 CP que establece que se impondrá la pena más grave de entre la correspondiente al tipo agravado de los delitos patrimoniales o a la pertenencia en concurso real con el delito de hurto o de robo.

#### **4. ANÁLISIS PRÁCTICO DE SUPUESTOS DE CONCURSO DE DELITOS.**

Bajo este epígrafe se realizará un análisis de diversos supuestos específicos de concurrencia que se plantean entre los delitos de hurto y de robo con otros delitos como son los delitos de lesiones, de homicidio, de estafa, de falsedad documental, de usurpación de funciones públicas, de resistencia o atentado contra la autoridad o de tenencia ilícita de armas, que se han resuelto conforme a las reglas del concurso de delitos argumentando el por qué de esta solución y concretando la clase de concurso con la que nos encontramos, ya sea este real, ideal o medial, haciendo especial énfasis en la posición adoptada por nuestra Jurisprudencia.

##### **4.1. DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA Y DELITO DE LESIONES O DELITO DE HOMICIDIO.**

Una de las situaciones de concurrencia que con más habitualidad se presentan en la práctica se produce entre el delito de robo con violencia y el delito de lesiones en la medida en la que esta violencia que sirve para calificar una conducta de apoderamiento de una cosa ajena como un robo puede ocasionar lesiones o la muerte sobre el sujeto que la padece.

Antes de resolver esta situación, hemos de delimitar qué ha de entenderse por violencia a efectos del delito de robo. Pese a existir cierto debate sobre este concepto, en torno a alguno de sus extremos sí que hay un amplio consenso, como en afirmar que la violencia referida es directa, empleada sobre las personas y no la indirecta, efectuada sobre las cosas y que de forma mediata afecta a las personas, a la vista de la propia redacción del artículo 237 CP. Un sector doctrinal considera que esta ha de ser, además de directa, propia, es decir, consistir estrictamente en el empleo de una fuerza física<sup>64</sup>, mientras que otro sector sostiene que también es válida a efectos de este delito la impropia, consistente en constreñir la voluntad del sujeto por otros medios, tales como la

---

<sup>64</sup> CUERDA ARNAU, M. L., “Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (IV): Robo con violencia o intimidación en las personas. Extorsión.”, en González Cussac (Dir.), 6ª Ed, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 373 ss.

hipnosis, el uso de narcóticos, etc.<sup>65</sup>. Siguiendo las tendencias doctrinales y jurisprudenciales, sostenemos que, además de directa, la violencia puede ser tanto propia como impropia ya que, aunque no se ejerza una violencia física directa sobre la persona, se produce sobre ella un resultado físico consecuencia de la acción del autor que anula o limita su voluntad y que es equiparable al producido mediante el uso de la violencia entendida esta en sentido estricto<sup>66</sup>.

Para que la violencia actúe como medio comisivo del robo es necesario que concurren los siguientes requisitos: que se trate de violencia física, que la violencia tenga una intensidad suficiente, que se ejerza sobre una persona física (ya sea sobre el sujeto pasivo del delito o sobre un tercero) y que se ejerza como medio de apoderamiento de la cosa mueble ajena o en un momento posterior conectado con este apoderamiento.

Si se constata que la violencia cumple los requisitos exigidos para determinar que una conducta es constitutiva de un delito de robo, se plantea ya el problema de qué ocurre con los resultados de la violencia en el caso de haberse producido (recuérdese que no es indispensable la causación de una lesión a la salud o integridad física para apreciar la concurrencia de la violencia). Para analizar esta cuestión hemos de partir necesariamente de la previsión contenida en el artículo 242.1 CP en el que se dispone que “El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años, sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los actos de violencia física que realizase”. El Código Penal soluciona el problema especificando que el sujeto ha de ser sancionado por el robo con violencia y además por los resultados de esta

---

<sup>65</sup> GALLEGU SOLER, J. I., “Delitos contra bienes jurídicos patrimoniales de apoderamiento”, cit., pp.527 ss.

<sup>66</sup> DE VICENTE MARTINEZ, R., “El robo con violencia o intimidación en las personas”, en *Cuadernos de derecho judicial*, N°13, 2004, pp. 431 ss.: “Si bien en un principio el concepto de violencia se constreñía a una utilización de la fuerza corporal para determinar la conducta de otro, posteriormente, el empleo de drogas, e incluso la utilización de técnicas psicológicas o hipnóticas, ha hecho que se produzca una ampliación del concepto hasta la llamada violencia impropia”.

Véase también, entre otras, la otras, STS 1332/2004, de 11 de noviembre: *Estimamos que, pese a estas diferencias, debe aplicarse aquí la misma doctrina jurisprudencial antes referida, pues quien se halla inhabilitado para darse cuenta del alcance de sus actos, como ocurrió en el caso presente, es un caso equiparable al de la privación total del conocimiento. Aquí se encontraba violentado el sujeto pasivo por el deliberado suministro de una sustancia narcótica. La equiparación de tal conducta con la del uso de violencia física es aplicable a los hechos aquí examinados.*

violencia, que serán habitualmente, el delito de lesiones y el de homicidio a través de un concurso de delitos<sup>67</sup>.

De lo expuesto hasta este momento se infiere que pueden plantearse varias situaciones: en primer lugar, puede ocurrir que estemos ante un resultado lesivo que puede consistir en unas lesiones o en un homicidio que son consecuencia de una conducta violenta, pero que no está en una relación de instrumentalidad con el apoderamiento o no ligada temporalmente con este (por ejemplo, cuando se emplea una vez este se ha consumado), en este supuesto nos encontramos con concurso real entre el delito de hurto y el delito de lesiones u homicidio en la modalidad que proceda.

En segundo lugar, si el autor de la conducta sí que se sirve de la violencia para lograr el apoderamiento de la cosa, pero sin que esta conducta produzca lesión alguna, los hechos serán constitutivos de un delito de robo con violencia sobre las personas. Así lo ha considerado la Audiencia Provincial de Cantabria, en la SAP 137/2016 de 8 de marzo, en la que confirma la condena impuesta a dos personas por un delito de robo con violencia por entender que el empujón que dan a la víctima del delito es constitutivo de la violencia, de la fuerza física que requiere el tipo para vencer la resistencia de quien trata de impedir que consumaran el apoderamiento, pero que no ocasiona resultado lesivo alguno.

Finalmente, cuando esta misma conducta da lugar a un resultado de lesiones o de homicidio, se ha de apreciar el delito que corresponda en concurso de delitos en la modalidad de concurso ideal con el delito de robo con violencia<sup>68</sup>. La Audiencia Provincial de Cantabria recoge esta línea jurisprudencial y la sintetiza, entre otras, en la

---

<sup>67</sup> Entre otras, STS 939/2004 de 12 de julio o la STS 917/2010 de 28 de octubre: *En efecto el delito de robo del art. 242.1 requiere el empleo de violencia, pero no exige la causación de lesiones corporales, de modo que el ataque a la salud e integridad corporal protegidos por el tipo de lesiones no es elemento indispensable del delito contra el patrimonio. Por ello la violencia del art. 242.1 CP solo absorbería las vías de hecho o el maltrato de obra sin causar lesión del art. 617.2 CP, pero no la causación de lesiones, que no pueden ser abarcadas dentro del contenido de ilicitud que es propio del robo violento. Ciertamente, de acuerdo con esta doctrina en el supuesto de concurso de delitos de robo y lesiones o, en su caso, asesinato, cada infracción se aplica de acuerdo con sus circunstancias específicas.*

<sup>68</sup> ALVAREZ GARCIA, F.J., “Robo con violencia o intimidación en las personas y extorsión”, cit., pp.152 ss.

SAP de Cantabria 534/2011 de 25 de noviembre de la siguiente manera: *[a]sí, la jurisprudencia ha señalado de modo concorde que cuando el medio violento o intimidatorio empleado por sí mismo integre, además, un acto de violencia física sancionable penalmente, tal acto se penara conforme al tipo que corresponde en concurso (ideal o real) con el delito violento ( Sentencias del Tribunal Supremo de 28 Sep. 1996 y 7 Feb. 1997). Este es el caso de autos y es palmario que lo alegado ha de ser rechazado.*

Así se ha pronunciado, además, a propósito de situaciones concretas en la SAP de Cantabria 117/2017 de 24 de marzo, que confirma la sentencia que condena como autor de un delito de robo con violencia en concurso ideal con un delito de lesiones a quien se apodera, en un establecimiento comercial, de productos de escritorio y, sin abandonar dicho lugar, es requerido por los vigilantes de seguridad para que los devuelva, de tal manera que no logra el efectivo apoderamiento de estos objetos, y les golpea y empuja, ocasionando contusiones para cuya curación se requieren, además de una primera asistencia facultativa, 28 días impositivos y tratamiento rehabilitador. En idéntico sentido se ha pronunciado este Tribunal en la SAP de Cantabria 136/2018 de 29 de marzo, confirmando la condena impuesta por, entre otros, un delito de robo con violencia en grado de tentativa en concurso ideal con un delito de lesiones leves a unos sujetos que forcejean con una mujer y la tiran al suelo, provocándole una contusión para cuya curación precisó de una primera asistencia facultativa y de 20 días, sin que le quedara secuela alguna, todo ello con el fin de apoderarse del bolso que lleva y con el que no logran hacerse dada la resistencia de la víctima.

La admisión del concurso de delitos entre el delito de robo con fuerza y los delitos contra la salud y la integridad física nos plantea un problema adicional y es el de qué ocurre cuando se emplean, como medios violentos, armas que implican una cualificación del tipo de robo y que, a su vez, permitirían cualificar los delitos con los que este delito entre en concurso. *A priori* podría parecer que, de apreciarse esta circunstancia agravante en ambos delitos, se estaría vulnerando el Principio *non bis in idem*. No obstante, si tomamos en consideración que la circunstancia agravante, aunque sea idéntica, se refiere a dos acciones diferentes que lesionan dos bienes jurídicos diferentes- el patrimonio y la salud e integridad física- por lo que es perfectamente posible apreciarla respecto de ambos

delitos<sup>69</sup>. Esta cuestión ha sido muy controvertida y se ha planteado en numerosas ocasiones ante los tribunales e, incluso, el Tribunal Supremo no mantiene una postura unánime, ya que en alguna ocasión ha considerado que no es posible aplicar un tipo cualificado por la concurrencia de una circunstancia agravante y cualificar otro con el que este esté en concurso por este mismo motivo. Sin embargo, mayoritariamente acepta la posibilidad de aplicar la agravación en uno y otro caso y la fundamenta, en sentencias tales como la STS 568/2009 de 28 de mayo o la STS 799/2010 de 21 de septiembre, de la siguiente manera: *[h]emos de seguir manteniendo la constante doctrina conforme a la cual no existe identidad de hecho entre dos comportamientos -sustraer y agredir- que atacan a bienes jurídicos diversos porque en ambos sea utilizado un mismo instrumento. Que la valoración de tal uso lleve a subsumir los diferentes comportamientos en sendos subtipos, cualificados por el medio usado no implica doble valoración de lo mismo. Basta advertir que lo que se valora es el uso y no el medio con independencia de dicho uso. El objeto de la valoración es el comportamiento y éste es diverso cuando consiste en sustraer y cuando consiste en agredir. Por otra parte, el uso de la misma arma para una acción era prescindible para la ejecución de la otra acción. Si, pese a ello, se persiste en acudir a dicho empleo en ambos hechos, éstos han de ser valorados con toma en consideración de todos los elementos que lo configuran, incluido el uso del arma.*

#### 4. 2. DELITO DE HURTO Y DELITO DE ESTAFA.

A propósito del delito de hurto, uno de los supuestos más habituales de concurrencia es el que se plantea con el delito de estafa. Piénsese en el supuesto en el que un sujeto se apodera de una tarjeta de crédito de otro y con ella realiza diversas compras o extrae dinero de un cajero. En estos casos, habitualmente el objeto de apoderamiento de la primera sustracción, es decir, la tarjeta, no tiene un valor reseñable en sí mismo, sino que es el medio para cometer un delito posterior. En este punto es necesario recordar que este objeto, tal y como dispone nuestro Código Penal, ha de ser una cosa mueble ajena. Por cosa ha de entenderse aquel objeto material o corporal, tangible, que ocupa un

---

<sup>69</sup> TAMARIT SUMALLA, J. M., “Comentario al art.148 CP”, en Quintero Olivares (Dir.), *Comentarios al Código Penal Español, Tomo I*, 7ª Ed., Aranzadi, Pamplona, 2016, pp. 1031 ss.

lugar en el espacio y que puede ser aprehensible y trasladable físicamente; por mueble, aquel objeto susceptible de ser transportado, que puede ser trasladado de un patrimonio a otro diferenciándose así del concepto de cosa mueble manejado en Derecho Civil y configurándose como un elemento descriptivo autónomo; y por ajeno, aquel objeto que no pertenece a la persona que realiza la acción de apoderamiento, recordando aquí que la teoría que defendemos es que el bien jurídico protegido en estos delitos es la propiedad y no la posesión, por lo que un objeto será ajeno para todo aquel que no sea su dueño o propietario<sup>70</sup>. Adicionalmente, se exige que la cosa tenga cierto valor en términos económicos<sup>71</sup> y que se determinará de forma general considerando su precio de venta al público, tal y como dispone la ley de enjuiciamiento criminal en su art. 365.

Dada precisamente la ausencia de valor del objeto de la conducta, en algunas ocasiones se ha estimado que la acción de apoderarse de estos objetos no es constitutiva de un delito de hurto porque ni existe ánimo de lucro en la conducta del autor, ni se produce lesión alguna en el patrimonio del sujeto pasivo del delito<sup>72</sup>; la conducta en si misma no es relevante penalmente, sino que el apoderamiento forma parte del delito de estafa, por el que se ha de sancionar al sujeto. Así se ha pronunciado el Tribunal Supremo en la STS 169/2000 de 12 de febrero, justificando su decisión de la siguiente manera: *[e]n relación con el apoderamiento de las dos tarjetas de crédito que el acusado realizó para utilizarlas como elemento de pago y conseguir con ello un beneficio económico,*

---

<sup>70</sup> Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 1993: *La noción de ajeno en estos delitos patrimoniales hay que contemplarla desde una perspectiva negativa, de no pertenencia al que se apodera ilícitamente de la cosa; ahora bien, pueden existir cosas ajenas que por su carácter de res derelictae (cosas abandonadas, art. 460.1 CC. ), res nullius ( art. 610 CC. ) y las denominadas res communes omnium (cosas de todos) son susceptibles de apoderamiento, de ocupación, sin comportar lesión patrimonial alguna; por este motivo, junto a la nota indicada de no pertenencia, se suele completar la noción de ajeno con la exigencia de que no sean susceptibles de ocupación.*

<sup>71</sup> Dada la dificultad a la hora de determinar el valor en algunos supuestos, tanto la jurisprudencia como algunos autores, entre otros, GARCIA ARAN, M., *El delito de hurto*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1998, admiten que pueda apreciarse este valor cuando se causa un perjuicio económico al sujeto pasivo del delito.

<sup>72</sup> BORJA JIMENEZ, E., “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (I): introducción general”, en González Cussac (Dir.), *Derecho Penal Parte Especial*, 6ª Ed, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, p. 340.

*debemos valorar, como nos pide la parte recurrente, si nos encontramos ante una falta independiente de hurto o por el contrario, dicha conducta debe integrarse y absorberse como un elemento instrumental, en el designio delictivo realmente dirigido a procurarse un verdadero enriquecimiento económico por medio de las compras realizadas y sin tomar en consideración como factor de enriquecimiento el valor del plástico que las constituye. Es verdad que alguna sentencia esporádica ha considerado que un talonario tiene valor económico en sí mismo, con independencia del que pueda tener en determinados ambientes relacionados con la delincuencia, pero a pesar de ello no se puede generalizar el ánimo de lucro de una manera automática y objetiva a todos los casos de apoderamiento. La tarjeta actúa a modo también de un instrumento, que por sí misma no reporta ningún beneficio a quien la sustrae, y que sólo tiene utilidad como medio de proporcionarse bienes o sumas de dinero, por lo que su apoderamiento carece, en este caso, de relevancia jurídico penal.*

De tal manera que estos casos, en los que *a priori* podemos pensar que estamos ante un concurso medial de delitos, el Tribunal Supremo ha resuelto que se trata de un único delito de estafa, en el que la conducta de apoderamiento es irrelevante penalmente. Este criterio se mantiene en sentencias más recientes tales como la STS 615/2019 de 11 de diciembre.

Sin embargo, podemos encontrarnos con otras sentencias en las que el Tribunal Supremo adopta una posición diferente por parte apreciando en estas situaciones un concurso de delitos, por ejemplo, en la STS 228/2002 de 11 de febrero, en la que confirma la pena impuesta a un sujeto como autor de un delito de hurto en concurso medial con una estafa a quien se apodera de una tarjeta de crédito que su propietario tiene guardada en la taquilla de un gimnasio y la utiliza para realizar diferentes compras. En idéntico sentido se ha pronunciado la Audiencia Provincial de Santander en la SAP 65/2018 de 19 de febrero, sentencia en la que confirma la condena por un delito de hurto en concurso medial con un delito de estafa en grado de tentativa a quien sustrae una cartera y utiliza las tarjetas que en ella encuentra para realizar operaciones en diversos cajeros que le son denegadas.



#### 4. 3. DELITO DE HURTO Y DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL.

Otro supuesto de concurrencia que se presenta en la práctica de forma habitual es aquel entre el delito de hurto y el delito de falsedad documental. Piénsese, por ejemplo, en el sujeto que se adueña de un talonario de cheques de una determinada persona y hace uso de este emitiéndolos como si lo hubiera hecho el autentico propietario de estos. El criterio para determinar cómo se ha de resolver esta concurrencia de delitos es idéntico al empleado cuando esta se da entre el hurto y la estafa. Así, si el objeto de apoderamiento tiene un valor económico y, en consecuencia, su sustracción supone un perjuicio patrimonial para su propietario, se apreciará entre ambos delitos un concurso medial, siendo el hurto el instrumento necesario para perpetrar a posteriori el robo. Por el contrario, si el objeto de apoderamiento no tiene valor económico, no produciría ningún perjuicio patrimonial al propietario ni concurriría el ánimo de lucro del autor de los hechos en la sustracción y, en consecuencia, la conducta no sería relevante a efectos penales y solo nos encontraríamos con un delito de falsedad documental.

En esta línea, nos encontramos con resoluciones como la SAP de Barcelona 783/2016, de 4 de noviembre, en la que se ha apreciado que existe un concurso medial entre el hurto y la falsedad documental cuando un sujeto se apodera de un talonario de recetas y de un sello con el membrete del medico que era el propietario de estas, para después expedir varias firmando como si se tratara del medico; o la STS 27/2020 de 4 de febrero de 2020, en la que se confirma la condena impuesta a quien, aprovechando la tenencia de unas llaves entregadas por el propietario de un vehículo mientras mantenían una relación sentimental, se apodera de este y falsifica la firma de su legítimo propietario a fin de inscribirlo a su nombre en el registro.

#### 4. 4. DELITO DE ROBO CON INTIMIDACIÓN SOBRE LAS PERSONAS Y DELITO DE USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS.

El delito de usurpación de funciones públicas se tipifica en el art. 402 CP y con él se sanciona la conducta de quien ejerce actos propios de una autoridad o funcionario público, atribuyéndose carácter oficial, siendo necesario para su comisión la concurrencia tanto de la usurpación como de la atribución referidas. En relación con este delito es

frecuente que sirva como medio para facilitar la comisión de un delito de robo con intimidación.

Pese a esta doble exigencia, la Jurisprudencia y la Doctrina consideran como requisito esencial la atribución del carácter oficial frente a la realización de los actos de tal manera que en el caso de concurrir únicamente la primera cabe apreciar el delito en tentativa mientras que, si solo se realiza la segunda, no podemos subsumir la conducta en este tipo penal<sup>73</sup>.

La conducta que dé lugar a la comisión del delito de usurpación puede realizarse para lograr el apoderamiento de una cosa, lo que plantea una serie de cuestiones relacionadas con los concursos que hemos de resolver: en primer lugar, ha de determinarse si esta conducta podría ser considerada como violencia o intimidación a efectos del delito de robo o si, por el contrario, no merecen esta consideración y la conducta de apoderarse es constitutiva de un delito de hurto; y en segundo lugar, resuelta la primera cuestión, ha de analizarse la relación concursal concreta entre el delito patrimonial apreciado y el delito de usurpación.

Respecto de la primera cuestión, considerando que el Legislador para tipificar el delito de robo se sirve de la clásica distinción entre *vis absoluta* y *vis compulsiva* y prevé como elemento específica la violencia o intimidación sobre las personas empleadas como medio para conseguir el apoderamiento, es necesario delimitar una y otra para comprobar si es posible encajar la usurpación en uno de estos medios.

En cuanto a la violencia o *vis absoluta*, para determinar su existencia a efectos de este delito, es necesario que concurren los siguientes requisitos: que se trate de violencia física, que la violencia tenga una intensidad suficiente, que se ejerza sobre una persona física, ya sea sobre el sujeto pasivo del delito o sobre un tercero y que se ejerza como medio de apoderamiento de la cosa mueble ajena o en un momento posterior conectado

---

<sup>73</sup> MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal, Parte Especial*, cit., p. 683.

con este apoderamiento<sup>74</sup>. Es evidente, por lo tanto, que el mero ejercicio de los actos que constituyen la usurpación no son en principio ejemplos de violencia.

La intimidación o *vis compulsiva* es una variante psicológica de la violencia que consiste en infundir un temor de un mal grave o inmediato dirigido a condicionar la voluntad del sujeto destinatario de esta y también ha de tener una intensidad suficiente para lograr coartar la libertad de decisión el sujeto. Ha de tratarse, en definitiva, de conductas objetivamente peligrosas para la libertad del sujeto por al reunir el mal anunciado las características de inmediato, serio posible y capaz de causar la reacción de temor en el sujeto pasivo<sup>75</sup>.

El Tribunal Supremo ha considerado intimidatoria la conducta de unos sujetos que se hacen pasar por policías para apoderarse de diferentes objetos, calificando la conducta como constitutiva de un delito de robo con intimidación y de otro de usurpación de funciones públicas. Entre otras, la STS 1438/2005, 23 de noviembre, que se ha convertido en una sentencia de gran relevancia por recoger la línea jurisprudencial seguida, dispone que *[e]l mal con el que se conmina -implícito en la acción desplegada- consiste, como mínimo, en la posibilidad de detención como consecuencia a las órdenes de los agentes; y no es necesario que se verbalice, pues se percibe inequívocamente por los sujetos pasivos (...), mediante la actitud mostrada, lenguaje corporal utilizado y exhibición de placas y de algún arma, por los sujetos activos. La potestad administrativa de coerción, que conlleva una inevitable intimidación, cuando se utiliza con fines espurios pierde su legitimidad, debiendo ser reconducida a los tipos penales correspondientes; en este caso al delito de robo comprendido en los arts. 237 y 242 del CP.*

Más reciente y en el mismo sentido nos encontramos con la STS 898/2012 de 15 de noviembre en la que se dispone que *[l]a exhibición de una placa policial y unas esposas genera un efecto intimidatorio -sea éste el desenlace de una operación policial legítima o simulada- que es suficiente para integrar el tipo del art. 242.1 del CP.* En esta

---

<sup>74</sup> MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal, Parte Especial*, cit., pp. 374 ss.

<sup>75</sup> ALVAREZ GARCIA, F. J., “Robo con violencia o intimidación en las personas y extorsión”, cit., pp.145 ss.

misma sentencia el Tribunal Supremo resuelve la cuestión de cuál ha de ser la relación concursal entre uno y otro delito determinando que en estos casos estamos ante un concurso real de delitos ya que la usurpación no es un medio necesario para la comisión del delito de robo con intimidación, en cuyo caso deberíamos hablar de un concurso ideal o medial de delitos, sino que se trata de una situación contingente, que depende únicamente de la voluntad del autor y de la planificación que este haga del delito<sup>76</sup> citando entre otras la STS 1670/2002 de 18 de diciembre o la STS 147/2007 de 9 de marzo.

#### 4.5. DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN Y DELITO DE ATENTADO O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.

Si atendemos al sujeto pasivo de los delitos de robo con violencia o intimidación es posible que se plantee otro problema concursal cuando este es una autoridad, un agente de esta o un funcionario público, actuando en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, en los casos en los que se los agrede, se oponga resistencia a su actuación mediante el uso de la intimidación o violencia o se les acometiera la conducta sería también constitutiva de un delito de atentado a la autoridad.

Deteniéndonos en los elementos de este delito es necesario, en primer lugar, analizar su sujeto pasivo que será, tal y como se ha adelantado, la autoridad, sus agentes o los funcionarios públicos. El alcance de estos conceptos lo encontramos en el propio Código Penal, en concreto, en el art. 24 CP que determina que tendrá la consideración de

---

<sup>76</sup> JOSHI JUBERT, U., “Unidad de hecho y concurso medial de delitos”, en *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, Tomo 45, N°2, 1992, p. 436: “La doctrina mayoritaria ha entendido que el concurso medial se daba cuando exista una relación de medio a fin entre dos delitos; se exige una relación de medialidad o de medio a fin, de tal modo, que el delito instrumento, sea medio necesario para la perpetración de las demás infracciones”.

Véase también la Circular FGE 4/2015: *La voluntad del autor no es suficiente para la configuración de este concurso ideal impropio, pues el Código exige que la relación entre los delitos sea necesaria, lo que deja fuera del concurso aquellos supuestos sujetos a la mera voluntad, a la mera conveniencia o a la mayor facilidad para la comisión del delito, siendo preciso que la conexión instrumental sea de carácter objetivo, superador del criterio subjetivo, que entre en el ámbito de lo imprescindible en la forma en que realmente ocurrieron los hechos delictivos concurrentes*, citando la STS 336/2014, de 11 de abril y STS 504/2003, de 2 de abril. [https://www.fiscal.es/memorias/estudio2016/CIR/CIR\\_04\\_2015.html](https://www.fiscal.es/memorias/estudio2016/CIR/CIR_04_2015.html) [Consultado: 30/07/2020]

autoridad [e]l que por si solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo caso, tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo. Se reputará también autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal; y de funcionario público todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas. Además de esta condición, los sujetos pasivos han de estar actuado en el ejercicio de las funciones de su cargo cuando sean objeto del delito, momento en el que se identifican con el órgano al que representan de tal manera que el ataque personal implica un ataque al orden público, que es precisamente el bien jurídico protegido por este delito<sup>77</sup>.

En cuanto a la conducta típica, esta puede consistir en agredir o con intimidación grave o violencia oponer resistencia o acometer a uno de estos sujetos. La Jurisprudencia ha interpretado que estas modalidades comisivas se pueden reconducir a dos: por un lado, las de agredir y acometer, en tanto que se consideran equivalentes por consistir precisamente el acometimiento en una agresión corporal<sup>78</sup> y, por otro lado, en la resistencia grave, entendiendo que se da esta gravedad cuando concurren en la acción violencia o intimidación.

---

<sup>77</sup> MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal, Parte Especial*, cit., pp. 785 ss.

<sup>78</sup> STS 338/2017 de 11 de mayo: *Acometer equivale a agredir y basta con que tal conducta se dé con una acción directamente dirigida a atacar a la autoridad (a sus agentes o a los funcionarios), advirtiendo la jurisprudencia que el atentado se perfecciona incluso cuando el acto de acometimiento no llega a consumarse. Lo esencial es al embestida o ataque violenta. Por ello, se ha señalado que este delito no exige un resultado lesivo del sujeto pasivo, que si concurre se penará independientemente calificando el atentado como delito de pura actividad, de forma que aunque no se llegue a golpear o agredir materialmente al sujeto pasivo, tal delito se consuma con le ataque o acometimiento, con independencia de que tal acometimiento se parifica con la grave intimidación, que puede consistir en un mero acto formal de iniciación del ataque o en un movimiento revelador del propósito agresivo.*

Véase también la Consulta 1/2017 FGE: *La conducta de acometimiento, recogida como conducta típica en el art.550.1 CP puede abarcar los supuestos de grave intimidación, cuando supongan un acto formal de iniciación del ataque o un movimiento revelador del propósito agresivo.* [https://www.fiscal.es/memorias/memoria2018/FISCALIA\\_SITE/recursos/pdf/capitulo\\_I/cap\\_I\\_7\\_1.pdf](https://www.fiscal.es/memorias/memoria2018/FISCALIA_SITE/recursos/pdf/capitulo_I/cap_I_7_1.pdf) [consultado: 30/07/2020].

Precisamente una de estas acciones que han de recaer sobre funcionarios, autoridad o agentes de autoridad, puede realizarse para lograr el efectivo apoderamiento de la cosa objeto del delito patrimonial, dando lugar su presencia al delito concreto de robo con violencia o intimidación, por lo que se hace necesario analizar cómo se relacionan ambos delitos. Una primera posibilidad consiste en apreciar un concurso de leyes si consideramos que el delito de atentado o resistencia se encuentra en una relación de especialidad, subsidiariedad, absorción o alternatividad con el delito de robo con fuerza, en tanto que la consecuencia jurídica prevista para este ya sanciona la totalidad del desvalor de la conducta del sujeto. Otra opción, con la que estamos de acuerdo en este trabajo, estimaría que en estos casos estamos ante un concurso de delitos porque no hay una única norma que de cobertura a la totalidad del injusto. Concretamente, debería apreciarse un concurso ideal de delitos al por ser una única acción, una conducta violenta o intimidatoria destinada a lograr el apoderamiento de la cosa y que recae sobre un funcionario, autoridad o agente, la que de lugar a la comisión de los delitos de robo con violencia o intimidación y de atentado o resistencia a la autoridad<sup>79</sup>.

Esta es la posición adoptada por nuestro Tribunal Supremo y así podemos citar, entre otras, la STS 678/2002, de 13 de abril, *[e]l delito de atentado y el de robo tienen partes del tipo que coinciden, dado que el empleo de fuerza contra agentes de la autoridad, propia del atentado, es equivalente conceptualmente a la violencia en las personas del robo. En el presente caso este elemento es producto de una única acción que se subsume tanto bajo el tipo del art. 551, como bajo el tipo del art. 242 CP. Se trata de una unidad natural de acción, pues ha sido llevada a cabo mediante un único movimiento corporal del autor que ejerció la violencia, aprovechada sin solución de continuidad para la sustracción del arma y del coche policial.*

Solución diferente ha de adoptarse cuando el autor de los hechos ya se haya hecho con el apoderamiento de la cosa pretendida, consumándose el delito patrimonial en cuestión y posteriormente realiza el ataque al funcionario, autoridad o agente de la

---

<sup>79</sup> CARRASCO ANDRINO, M. M., ALVAREZ GARCÍA, F. J., “Delitos de atentados, resistencia y desobediencias”, en Álvarez García (Dir.), *Tratado de Derecho Penal Español. Parte Especial. Tomo V*, Valencia, 2019, p. 177.

autoridad. En estos casos no cabe apreciar un concurso ideal de delitos porque nos encontramos con dos acciones claramente diferenciadas y se ha de optar por la solución que ofrece el concurso real. Así lo hace el Tribunal Supremo en la STS 1730/1999 de 7 de diciembre en la que expresamente se dispone lo siguiente: *En el caso presente no cabe hablar de absorción del delito de atentado por el robo, aunque éste lo fuera aplicando la figura agravada del art.242.2, porque se trata de delitos referidos a bienes jurídicos diferentes, la propiedad en un caso, y en el necesario respeto a la función pública en otro, cometidos a través de acciones sucesivas, para cuya adecuada punición es preciso aplicar conjuntamente las dos normas penales que de modo separado sancionan tales comportamientos: sólo queda cubierta la total antijuridicidad de los hechos aquí enjuiciados si se aplican conjuntamente las normas penales que sancionan el robo y el atentado. [...] Ciertamente no cabe hablar aquí de un concurso de normas del art.8.3, que es lo que parece pretender el recurrente, sino un concurso de delitos del art. 73.*

La Audiencia Provincial de Cantabria también ha dado este tratamiento a estos hechos en la SAP de 8 de febrero de 2001 al desestimar un recurso de apelación del condenado por un delito de robo con fuerza en grado de tentativa y un delito de atentado por haber tratado de apoderarse de una serie de objetos en una oficina a la que accedieron rompiendo varios tramos de una verja y forzando una puerta, sin que pudieran consumar el delito dado que fueron atacados por unos perros y posteriormente durante la circulación, ante un dispositivo de espera que se había preparado para detenerlos, se saltaron el alto, golpeando el coche de la policía y siendo necesaria para su detención una persecución policial.

#### 4.6. DELITO DE ROBO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMAS U OTROS INSTRUMENTOS PELIGROSOS Y DELITO DE TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS.

El Legislador penal consciente de la mayor peligrosidad que existe para la vida y para la salud del sujeto pasivo del delito de robo con violencia o intimidación cuando el autor de los hechos se sirve de armas u otros instrumentos peligrosos, prevé una cualificación de este delito por el empleo de estos medios. La mera tenencia ilícita de armas también se sanciona de manera independiente en el art. 563 CP por lo que resulta necesario resolver si la aplicación de ambos delitos es compatible o si, por el contrario,

se produce una colisión entre ambos preceptos y basta con aplicar uno para dar una respuesta punitiva a la totalidad de la conducta.

Antes de abordar este problema, hemos de determinar qué se entiende por arma a efectos de estas disposiciones. El concepto que ha de ofrecerse de arma es debatido habiendo sectores doctrinales proclives a entender que únicamente serán armas las que se entiendan como tales a efectos del delito de tenencia ilícita o que solo han de identificarse como tales las armas dispuestas en el reglamento de armas configurándose así como un elemento normativo del delito, mientras que otros consideran que es tal todo medio apto para producir un daño<sup>80</sup>. La posición mayoritaria es la segunda, posición que también adopta nuestro Tribunal Supremo, para quien arma es todo instrumento apto para lesionar o defenderse<sup>81</sup>.

Aun optándose por la interpretación estricta del concepto de arma, también cabe apreciar una mayor gravedad en la conducta en aplicación de esta cualificación cuando un instrumento no se califique como arma pero sea un medio peligroso e incluso sin contemplarse como tal siempre que se trate de un instrumento peligroso, entendiéndose como tal *[a]quel objeto que por su naturaleza propia naturaleza o forma en que pueda ser manejada, represente un riesgo potencial grave para las personas amenazadas, pudiéndose utilizar de modo contundente o incisivo, así como los que pinchan o punzan, con capacidad de producir un efecto lesivo en la integridad física* (Acuerdo del Tribunal Supremo de 18 de abril de 1999). Por esta última vía, nos encontramos con resoluciones en las que se agrava la conducta cuando el autor de los hechos emplea una jeringuilla ensangrentada o con una aguja en un extremo (SSTS 22 de marzo de 2000), bates de

---

<sup>80</sup> GALLEGO SOLER, J. I., “Delitos contra bienes jurídicos patrimoniales de apoderamiento”, cit., p. 532.

<sup>81</sup> ATS de 19 de enero de 2012: *Hemos de decir que una reiterada doctrina de esta Sala ha venido estableciendo, respecto a qué objetos responden al concepto de arma o instrumento peligroso, que lo relevante es la susceptibilidad de estos de aumentar o potenciar la capacidad agresiva del autor, incrementando el riesgo para el asaltado y por tanto disminuyendo su capacidad de defensa, por lo que se han entendido como tales, además de las armas de fuego, las consideradas armas blancas, entre otros, un estilete, un cortaplumas, navajas, cualquiera que sean sus características, salvo que sea de pequeño tamaño, o una jeringuilla, cuando tiene incorporada la aguja.*



béisbol, palos, trozos de madera, navajas, látigos o hachas (SAP de alicante 28/2005 de 22 de junio).

La peligrosidad del arma o del instrumento peligroso ha de ser valorada de forma objetiva: han de tratarse de armas o instrumentos idóneos para producir daño a la vida o a la salud, lo que excluye de la aplicación de estos tipos en aquellos supuestos en los que se emplean armas simuladas o inoperativas, salvo que puedan valorarse como objetos peligrosos por su peso, forma o dureza, y por esta cualidad aumentar la capacidad agresiva del autor de los hechos y reducir la capacidad defensiva de la víctima. La sentencia del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2000 recoge esta exigencia de forma muy acertada, a propósito de un arma de fuego, de la siguiente manera: *[l]as armas de fuego que carecen de la aptitud de disparo o de las que se desconoce dicha aptitud y, podemos añadir, las fingidas o simuladas, pueden ser consideradas como instrumentos peligrosos, mas tal consideración no puede predicarse de un modo absoluto e incondicionado, sino que debe quedar supeditada a que se pueda comprobar la posibilidad de un uso de la misma que responda a dichas características.*

El delito de tenencia ilícita de armas castiga la mera tenencia, la conducta de tener una de estas armas sin la licencia habilitante, sin embargo, el tipo agravado del delito de robo con violencia o intimidación, además de exigir que el sujeto autor de los hechos emplee un arma o un medio peligroso en la comisión de estos y que con ello se creé o acentúe una situación de riesgo para la integridad y la salud de las personas, requiere también que la utilización de este medio esté dirigida a asegurar el apoderamiento sobre la cosa objeto del robo o para garantizar la huida y lograr así la plena disponibilidad sobre esta<sup>82</sup>.

Resuelta esta cuestión, a fin de evitar una doble incriminación de la conducta, conculcando así el Principio *non bis in idem*, hemos de determinar si estamos ante un concurso de leyes, en el caso de que baste con la aplicación de una de las normas para abarcar la totalidad del desvalor de la conducta o si estamos ante un concurso de delitos,

---

<sup>82</sup> GALLEGO SOLER, J. I., “Delitos contra bienes jurídicos patrimoniales de apoderamiento”, cit., p. 532.

en el caso de que sea necesario aplicar ambas disposiciones para valorar de forma plena la conducta. Recordando que la diferencia esencial entre una y otra figura es que en el caso del concurso de leyes ambas disposiciones concurrentes protegen el mismo bien jurídico, mientras que en el concurso de delitos, los bienes jurídicos protegidos son diferentes y, considerando que el delito de robo con violencia o intimidación sobre las personas agravado por el empleo de arma o instrumento peligroso protege el patrimonio y la vida e integridad de las personas, y el delito de tenencia ilícita de armas protege la seguridad colectiva, podemos afirmar que estamos ante un concurso de delitos<sup>83</sup>. Más en concreto, se trata de un concurso real de delitos, porque la infracción de más de un precepto penal se produce por la realización de una pluralidad de acciones o de un concurso medial, si esta pluralidad de delitos están relacionados medio-fin de tal manera que la comisión del delito de tenencia de armas sirve como medio para asegurar la comisión del delito de robo cualificado.

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo, en la STS 454/2015, de 10 julio considerando que *[e]n el caso sometido a nuestra consideración, una y otra figura delictiva (delito de robo con intimidación y uso de armas y delito de tenencia ilícita de armas) protegen bienes jurídicos distintos, el patrimonio y la integridad física en el caso de robo, y la seguridad general de la comunidad, puesta en peligro cuando son detentadas armas de fuego con posibilidad de uso por personas que no han sido objeto de controles y comprobaciones necesarias para tener licencia que les habilite para su utilización. Ponderando el plus de antijuridicidad y de peligrosidad que comporta en la ejecución del robo violento, el legislador ha querido atribuir una sanción mas intensa cuando medie el uso de arma, lo que no impide, en el caso que nos ocupa, la comisión del otro ilícito dado que la detentación del arma no fue momentánea con respecto al coacusado León Victorino. La jurisprudencia específica a la hora de considerar la plena compatibilidad entre los tipos de robo con intimidación y uso de arma y el delito de tenencia ilícita de armas, considerando que ambos se rigen por las normas del concurso real de delitos, SSTs. 29.1.2001 (RJ 2001, 1655) , 30.1.2001 (RJ 2001, 406) , reconocen la aplicación en relación de concurso real de ambos tipos delictivos*

---

<sup>83</sup> GARCIA ALBERO, R., “Comentario al art. 563 CP”, en Quintero Olivares (Dir.), *Comentarios al Código Penal Español, Tomo II*, 7ª Ed., Aranzadi, Pamplona, 2016, pp. 1827 ss.

*precisamente sobre la base de los diferentes bienes jurídicos en cada uno de los casos y el ATS. 8.9.2005 (JUR 2005, 219409) , dice lo siguiente: Naturalmente, entre el delito de tenencia ilícita de armas y el robo con violencia no existe una relación de especialidad, subsidiaridad o consecución, ni ninguna otra que permita apreciar un concurso (aparente) de leyes, por lo que difícilmente el primero puede quedar absorbido por el segundo, como lo pretende el recurrente, entre ambos hay, lisa y llanamente, un concurso de delitos, como correctamente ha apreciado el tribunal de instancia.*

## 5. CONCLUSIONES.

### I.

El concurso de leyes y el concurso de delitos parten de una misma situación de hecho: estamos ante una conducta de un sujeto que, a primera vista, puede ser calificada conforme a dos preceptos diferentes del Código Penal, pero mientras que el primero se trata de un problema de interpretación y aplicación de la ley penal, el segundo es un problema de aplicación de las penas.

Así, se entiende por concurso de leyes aquella situación en la que concurre más de una norma penal a la hora de calificar unos hechos, siendo la aplicación simultánea de todas ellas incompatible por ser una de estas normas suficiente para abarcar la totalidad del injusto. La solución a este problema la ofrece el artículo 8 CP que establece que la norma a aplicar se seleccionará conforme a los criterios que en él se recogen y que son el Principio de Especialidad, de Subsidiariedad, de Consunción y de Alternatividad.

Mientras que, por concurso de delitos, ha de entenderse aquella situación en la que el sujeto ha cometido más de un delito, lesionando así varios bienes jurídicos e infringiendo varias normas penales sin que la aplicación de una de ellas excluya la del resto, de tal manera que, para sancionar la totalidad de la conducta, es necesario que se apliquen todas las normas concurrentes. La forma concreta de aplicar estos preceptos viene determinada por las reglas contenidas en los artículos 73 a 78 y en los que se diferencian las clases de concursos de delitos con los que podemos encontrarnos y que son el concurso real, el concurso medial y el concurso ideal.

El concurso real de delitos es aquel que se plantea cuando son varias acciones las que infringen varias normas penales, cometiéndose así una pluralidad de delitos que pueden ser de igual naturaleza, en cuyo caso el concurso real será homogéneo o de diferente naturaleza, siendo en este caso heterogéneo.

El concurso ideal de delitos es el que se plantea cuando, con una única acción, se infringe más de una norma penal, dando lugar a la comisión de más de un delito, delitos que pueden ser de igual o de diferente naturaleza, calificándose el concurso ideal como homogéneo o heterogéneo respectivamente.

Por último, por concurso medial de delitos ha de entenderse aquella situación en la que un sujeto comete más de un delito, siendo una de estas infracciones el medio para cometer la otra.

## II.

Los supuestos de concurrencia de normativa que se producen entre los delitos de robo y de hurto con otros delitos y que tanto la Jurisprudencia como la Doctrina han resuelto conforme a las reglas previstas para el concurso de leyes son aquellos que se plantean con el delito de daños, con el delito de detención ilegal, con el delito de allanamiento de morada o de domicilio de persona jurídica, con el delito de amenazas, con el delito de coacciones y con el delito de pertenencia a organización o grupo criminal.

En estos casos, cuando se entiende que las conductas que aisladamente pueden ser constitutivas de uno de estos delitos son el medio para lograr el efectivo apoderamiento de la cosa objeto del delito patrimonial, se subsumirán estas dentro del delito de hurto o de robo y únicamente se sancionará a su autor por estos. Esta solución viene dada por la aplicación del Principio de Absorción o Consunción recogido en el art. 8.3 CP que implica que el precepto más amplio o complejo, es decir, el correspondiente al delito de robo, absorbe los más simples en los que pueden ser subsumidos los hechos, es decir, los correspondientes a los delitos de daños, detención ilegal, allanamiento, coacciones y amenazas, por ser suficiente la aplicación del delito patrimonial para valorar la totalidad del injusto.

Cuando la conducta constitutiva de uno de estos delitos se realiza una vez que el sujeto logra el apoderamiento efectivo de la cosa, es decir, habiéndose consumado ya el delito de hurto o de robo o resulta desproporcionada o innecesaria para alcanzar tal fin, el tratamiento que esta concurrencia de normas recibe no es ya el del concurso de leyes sino el del concurso de delitos en la modalidad que corresponda.

También ha de ser resuelto como un concurso de leyes aquel que se produce entre el delito de hurto o robo agravado por ser el autor miembro de un grupo u organización criminal y el delito de hurto o robo con el delito de pertenencia a grupo u organización criminal, pero en este caso no por aplicación del Principio de Consunción sino por el

Principio de Alternatividad que determina que se aplique la norma que sanciona de manera más grave la conducta del autor.

### **III.**

La concurrencia entre los delitos de robo y los delitos de lesiones o de homicidio se resolverá conforme a las reglas del concurso real de delitos cuando la conducta violenta del autor tenga como resultado las lesiones o la muerte del sujeto que la padece, pero sin que esta conducta sea instrumental al apoderamiento o esté desconectada temporalmente de este. En estos casos, por aplicación de lo dispuesto en el art. 73 CP, se impondrá al sujeto la pena correspondiente por cada uno de los delitos para su cumplimiento simultáneo o sucesivo de no ser este posible, tal y como recoge el art. 75 CP, siempre dentro de los límites de máxima duración del art. 76 CP.

Idéntica solución ha de ofrecerse cuando el delito patrimonial concurre con el delito de usurpación de funciones públicas, siendo esta usurpación la intimidación que se requiere para calificar el apoderamiento como un delito de robo con intimidación. En este caso se considera concurso real por no ser la comisión del delito de usurpación necesario para la del delito de robo, sino que depende únicamente de la voluntad del autor.

### **IV.**

Serán tratadas como un concurso medial de delitos aquellas situaciones en las que se presenten un delito de robo o de hurto y un delito de estafa o de falsedad documental cuando la comisión del delito patrimonial sea el medio para cometer uno de los segundos, que serán los que realmente le reporten un beneficio a su autor. La conducta se sancionará, en aplicación de lo dispuesto en el art. 77 CP, aplicando la pena superior en grado a la pena concreta que hubiera correspondido imponer por el delito más grave de los cometidos o la suma de las penas que corresponden a cada uno de los delitos cometidos si esto resulta más ventajoso para el reo. En algunos casos, la Jurisprudencia ha apreciado que existe un único delito de estafa o falsedad documental (sin apreciar el hurto) si el objeto del apoderamiento no tiene un valor económico por sí mismo.

Esta misma respuesta se dará a la concurrencia entre el delito de robo con violencia o intimidación agravado por el uso de armas u otros instrumentos peligrosos

con el delito de tenencia ilícita de armas cuando en la comisión del robo con violencia o intimidación se emplea el arma en cuestión para lograr el efectivo apoderamiento.

## V.

La concurrencia entre el delito patrimonial y el delito de lesiones o de homicidio se calificará como un concurso ideal de delitos cuando la violencia que da lugar al resultado lesivo o de muerte sea necesaria para que el autor de los hechos se haga con el apoderamiento efectivo de la cosa. La pena a imponer resultará de la aplicación de las previsiones del art. 77 CP, artículo que establece para estos casos la regla penológica de la exasperación, es decir, se aplicará la pena prevista para la infracción más grave en su mitad superior, salvo que esto resulte más perjudicial para el condenado que penar de forma independiente cada uno de los delitos cometidos.

Igualmente, será tratada como un concurso ideal la concurrencia que se produce entre el delito de robo con violencia o intimidación y el delito de atentado o resistencia a la autoridad cuando la misma conducta intimidatoria o violenta de la que se sirve el sujeto para apoderarse de la cosa recae sobre un funcionario público, una autoridad o uno de sus agentes.

## **6. RELACIÓN DE SENTENCIAS.**

### **6.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.**

SSTC 2/1981 de 30 de enero.

SSTC 77/1983, de 3 de octubre.

### **6.2. TRIBUNAL SUPREMO.**

STS de 2 de julio de 1979.

STS de 27 de octubre de 1982.

STS 1881/1987, de 23 de octubre.

STS de 1 de marzo de 1990.

STS de 16 de enero de 1991.

STS de 25 de febrero de 1991.

STS de 15 de marzo de 1991.

STS de 19 de junio de 1992.

STS de 30 de octubre de 1992.

STS 25 de marzo de 1993.

STS 3259/1993, de 22 de mayo.

STS de 19 de julio de 1993.

STS de 21 de noviembre de 1997.

Acuerdo del TS de 18 de abril de 1999.

STS 1730/1999, de 7 de diciembre.

STS 131/2000, de 2 de febrero.

STS 169/2000, de 12 de febrero.

STS 22 de marzo de 2000.



STS de 17 de abril de 2000.

STS de 13 de junio de 2000.

STS de 28 de junio de 2000.

Acuerdo del TS de 6 de octubre de 2000.

STS 706/2001, de 27 de junio.

STS de 20 de julio de 2001.

STS 1973/2001, de 9 de octubre.

STS 2206/2001 de 23 de noviembre.

STS 228/2002 de 11 de febrero.

STS 678/2002, de 13 de abril.

STS 939/2004 de 12 de julio.

STS 1332/2004, de 11 de noviembre.

STS 1438/2005, 23 de noviembre.

STS 1020/2007, de 29 de noviembre.

STS 282/2008, de 22 de mayo.

STS 568/2009, de 28 de mayo.

STS de 799/2010, de 21 de septiembre.

STS 917/2010, de 28 de octubre.

STS 254/2011, de 29 de marzo.

ATS de 19 de enero de 2012.

STS 35/2012 de 2 de febrero.

STS 223/2012, de 20 de marzo.

STS 898/2012, de 15 de noviembre.

STS 623/2013, de 17 de julio.

STS 341/2015, de 16 de junio.

STS 454/2015, de 10 julio.

STS 710/2016, de 21 de septiembre.

STS 972/2016, de 21 de diciembre.

STS 338/2017 de 11 de mayo.

STS 520/2017, de 6 de julio.

STS 788/2017, de 7 de diciembre.

STS 60/2018, de 2 de febrero.

STS 419/2018, de 5 de abril.

STS 137/2019, de 12 de marzo.

STS 70/2019, de 28 de marzo.

STS 1100/2019 de 14 de noviembre.

STS 615/2019 de 11 de diciembre.

STS 27/2020 de 4 de febrero de 2020.

### 6.3. TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA.

STSJ de la Comunidad Valenciana 35/2017, de 4 de octubre.

### 6.4. AUDIENCIAS PROVINCIALES.

SAP de Girona de 7 de febrero de 2.000.

SAP de Alicante 28/2005 de 22 de junio

AAP de Salamanca 108/2012, de 30 de marzo.

SAP de Alicante 247/2015 de 20 de mayo.

SAP de Barcelona 783/2016 de 4 de noviembre.

#### 6.5. AUDIENCIA PROVINCIAL DE CANTABRIA.

SAP de Cantabria, de 8 de febrero de 2001.

SAP de Cantabria 534/2011, de 25 de noviembre.

SAP de Cantabria 137/2016, de 8 de marzo.

SAP de Cantabria 51/2015, de 11 de febrero.

SAP de Cantabria 117/2017, de 24 de marzo.

SAP de Cantabria 65/2018 de 19 de febrero.

SAP de Cantabria 136/2018, de 29 de marzo.

SAP de Cantabria 274/2019, de 20 de mayo.

## 7. BIBLIOGRAFIA.

ALVAREZ GARCIA, F. J., “Robo con violencia o intimidación en las personas y extorsión”, en Álvarez García (Dir.), *Derecho Penal Español, Parte Especial (II)*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 136-180.

BARJA DE QUIROGA, J., *Tratado de Derecho Penal Parte General*, 2ª Ed., Aranzadi, Pamplona, 2018.

BORJA JIMENEZ, E., “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (I): introducción general”, en González Cussac (Dir.), *Derecho Penal Parte Especial*, 6ª Ed, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 337-344.

CARRASCO ANDRINO, M. M., ALVAREZ GARCÍA, F. J., “Delitos de atentados, resistencia y desobediencias”, en Álvarez García (Dir.), *Tratado de Derecho Penal Español. Parte Especial (V)*, Valencia, 2019, pp. 41-265

CUELLO CONTRERAS, J., “La frontera entre el concurso de leyes y el de delitos”, en *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, 1979, pp. 47-91. Disponible en [https://boe.es/biblioteca\\_juridica/anuarios\\_derecho/abrir\\_pdf.php?id=ANU-P-1979-10004500092\\_ANUARIO\\_DE\\_DERECHO\\_PENAL\\_Y\\_CIENCIAS\\_PENALES\\_La\\_frontera\\_entre\\_el\\_concurso\\_de\\_leyes\\_y\\_el\\_concurso\\_ideal\\_de\\_delitos\\_la\\_función\\_de\\_la\\_normativa\\_concursal\\_\(I\)](https://boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-1979-10004500092_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_La_frontera_entre_el_concurso_de_leyes_y_el_concurso_ideal_de_delitos_la_función_de_la_normativa_concursal_(I)) [fecha de última consulta: 30/7/202]

CUERDA ARNAU, M. L., “Delitos contra la libertad (y II): Amenazas. Coacciones”, en González Cussac (Dir.), *Derecho Penal Parte Especial*, 6ª Ed, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 159-186.

CUERDA ARNAU, M. L., “Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (IV): Robo con violencia o intimidación en las personas. Extorsión.”, en González Cussac (Dir.), *Derecho Penal Parte Especial*, 6ª Ed, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 373-390.

DE LA CUESTA AGUADO, P. M., “Allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas” en Álvarez García (Dir.), *Derecho Penal Parte Especial (I)*, 2ª Ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 807-829.

DE VICENTE MARTINEZ, R., “El robo con violencia o intimidación en las personas”, en *Cuadernos de derecho judicial*, N°13, 2004, pp. 431-477.

DEL CARPIO DELGADO, J., “Análisis de las circunstancias agravantes comunes al hurto y al robo con fuerza en las cosas”, en Carpio Delgado (Dir.), *Algunas cuestiones de Parte Especial tras la Reforma de 2015 del Código Penal*, Valencia, 2018, pp. 187-220.

GALLEGO SOLER, J. I., “Delitos contra bienes jurídicos patrimoniales de apoderamiento”, en Corcoy Bidasolo (Dir.), *Manual de Derecho Penal Parte Especial Tomo I*, 2ª Ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 503-542.

GARCÍA ALBERO, R., “Comentario al art. 74 CP”, en Quintero Olivares (Dir.), *Comentarios al Código Penal Español, Tomo I*, 7ª Ed., Aranzadi, Pamplona, 2016, pp. 568-578.

GARCÍA ALBERO, R., “Comentario al art. 77 CP”, en Quintero Olivares (Dir.), *Comentarios al Código Penal Español, Tomo I*, 7ª Ed., Aranzadi, Pamplona, 2016, pp. 583-606.

GARCIA ALBERO, R., “Comentario al art. 563 CP”, en Quintero Olivares (Dir.), *Comentarios al Código Penal Español, Tomo I*, 7ª Ed., Aranzadi, Pamplona, 2016, pp. 1827-1834.

GARCIA ALBERO, R., *Non bis in ídem material y concurso de leyes*, Cedecs, Barcelona, 1995.

GARCIA ARAN, M., *El delito de hurto*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1998.

GORRIZ ROYO, E. M., “Delitos de robo: arts. 237, 240, 241 y 242 CP”, en González Cussac (Dir.), *Comentarios a la reforma del Código Penal de 2015*, 2ª Ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 678-700.

JOSHI JUBERT, U., “Unidad de hecho y concurso medial de delitos”, en *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, Tomo 45, Nº2, 1992, pp. 613-636.

MARIN DE ESPINOSA CEBALLOS, E., “Las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y los concursos de delitos”, en Moreno-Torres Herrera (Dir.), *Lecciones de Derecho Penal, Parte General*, 4ª Ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 225-238.

MIR PUIG, S., “El delito de coacciones en el Código Penal”, en *Anuario de Derecho Penal y ciencias penales*, Tomo 30, Nº2, 1977, pp. 269-306.

MIR PUIG, S., *Derecho Penal, Parte General*, 10ª Ed., Reppertor, Barcelona, 2016.

MORENO-TORRES HERRERA, M. R., “Límites al Poder Punitivo del Estado”, en Moreno Torres (Dir.), *Lecciones de derecho Penal, Parte General*, 4ª Ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 47-61.

MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal, Parte Especial*, 22ª Ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.

MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal, Parte General*, 10ª Ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019.

ORTS BERENGUER, E., GONZALEZ CUSSAC, J. L., *Compendio de Derecho Penal*, 8ª Ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019.

QUINTERO OLIVARES, G., *Comentarios al Código Penal Español, Tomo I*, 7ª Ed., Aranzadi, Pamplona, 2016.

QUINTERO OLIVARES, G., *Comentarios al Código Penal Español, Tomo II*, 7ª Ed., Aranzadi, Pamplona, 2016.

QUINTERO OLIVARES, G., *Parte General del Derecho Penal*, 4ª Ed., Aranzadi, Pamplona, 2010.

REBOLLO VARGAS, R., “Detenciones ilegales y secuestros”, en Álvarez García (Dir.), *Derecho Penal Parte Especial (I)*, 2ª Ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 320-344.

SANCHEZ MELGAR, J., “Nuevas figuras delictivas introducidas en el código penal por la Ley 1/2015, de 30 de marzo” en *Cuadernos digitales de formación*, Nº7, 2016.

TAMARIT SUMALLA, J. M., “Comentario al art.148 CP”, en Quintero Olivares (Dir.), *Comentarios al Código Penal Español, Tomo I*, 7ª Ed., Aranzadi, Pamplona, 2016, pp. 1031-1042.